



INFORME PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE NICARAGUA.

CONSULTA CIUDADANA | JUNIO DE 2026 |
HAGAMOS DEMOCRACIA NIC-CR | 28 DE JULIO DE 2026

Introducción	2
Resumen ejecutivo.....	3
Ficha metodológica y cierre de base.....	4
Cobertura territorial	5
Perfil de las personas consultadas	6
Resultados gráficos.....	6
Economía y costo de vida.....	8
Resultados gráficos.....	9
Migración y remesas	11
Resultados gráficos.....	12
Control, vigilancia y represión.....	14
Resultados gráficos.....	15
Coyuntura política y presos políticos.....	16
Resultados gráficos.....	18
Elecciones y participación	20
Resultados gráficos.....	21
Corrupción e inseguridad	22
Resultados gráficos.....	23
Servicios públicos: salud y educación	25
Resultados gráficos.....	26
Medios, oposición y negociación	28
Resultados gráficos.....	29
Comparación longitudinal marzo-junio.....	31
Resultados gráficos.....	32
Conclusiones	33
Anexo gráfico. Figuras complementarias	35
Anexo 1. Tablas descriptivas	37
Preguntas de respuesta única.....	37
Preguntas de respuesta múltiple	43
Anexo 2. Cruces analíticos.....	47
Anexo 3. Control de calidad y reclasificación territorial	48
Resumen de controles aplicados.....	48
Criterios de reclasificación territorial	48

Introducción

Desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018, y con especial intensidad a partir del proceso electoral de 2021, la dictadura Ortega-Murillo ha profundizado la represión estatal en Nicaragua. Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento por motivos políticos, la persecución dentro y fuera del país, la cancelación de miles de organizaciones de la sociedad civil y el desplazamiento de una parte considerable de la población han reducido de forma drástica el espacio cívico. A ello se suma la censura y el exilio de medios y periodistas independientes, que continúan informando en condiciones adversas.

En este contexto existe poca información verificable sobre cómo la ciudadanía percibe la realidad política, económica y social del país. El cierre de los espacios de deliberación, el castigo a la crítica, la vigilancia y el temor a represalias favorecen la autocensura y dificultan la expresión pública de opiniones. Al mismo tiempo, la narrativa oficial de normalidad y progreso contrasta con preocupaciones cotidianas relacionadas con el costo de vida, la insuficiencia de los ingresos, el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad y la migración.

El marco institucional también se ha transformado. Las reformas constitucionales aprobadas entre 2024 y 2025 establecieron un modelo de copresidencia, ampliaron la concentración de poder en el Ejecutivo y debilitaron aún más los contrapesos del Estado. Otras reformas han restringido la doble nacionalidad y ampliado la posibilidad de privar de la nacionalidad a personas consideradas opositoras. A ello se suma la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes y otras disposiciones que incrementan la capacidad estatal para solicitar información a los operadores y profundizan las preocupaciones sobre vigilancia, privacidad y libertad de expresión.

El entorno regional e internacional también cambió durante 2026. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su presentación ante la justicia de Estados Unidos, el bloqueo energético y petrolero impuesto a Cuba y la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán modificaron el escenario de aliados relevantes para la dictadura nicaragüense. Paralelamente, los informes y actualizaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúan documentando el carácter sistemático de la represión, la concentración del poder y la persistencia de graves violaciones de derechos humanos. Estas dinámicas reconfiguran el entorno estratégico de Nicaragua y alimentan el debate sobre el alcance y los posibles efectos de la presión internacional.

Ante la falta de espacios abiertos y seguros para conocer estas percepciones, Hagamos Democracia Nic-CR realiza consultas ciudadanas periódicas desde diciembre de 2022. La ronda de junio de 2026 es la decimoquinta consulta y corresponde al cierre del segundo trimestre del año. El levantamiento recibió 400 respuestas, de las cuales 396 fueron incluidas en el análisis, con participación procedente de 40 municipios o distritos del país.

El cuestionario conserva temas que permiten observar continuidades y cambios entre rondas, como la capacidad de los hogares para cubrir sus gastos y la canasta básica, el comportamiento

de los precios, el empleo, la migración, las remesas, la corrupción, la seguridad, la educación y la salud. También incorpora preguntas vinculadas con la coyuntura política: vigilancia y control social, presos políticos, posibilidades de elecciones libres, participación ciudadana, medios independientes, oposición, negociación y posibles efectos de una mayor presión internacional sobre Nicaragua.

Este esfuerzo no sustituye una encuesta probabilística ni pretende representar estadísticamente a toda la población nicaragüense. Su valor político y ciudadano consiste en abrir un canal sistemático de escucha en un país donde opinar libremente puede implicar riesgos, documentar preocupaciones que suelen quedar fuera de la narrativa oficial y aportar evidencia para la reflexión pública. La continuidad de las consultas permite, además, identificar cambios en las percepciones y ofrecer insumos a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y actores democráticos interesados en comprender la evolución de la realidad nacional.

Resumen ejecutivo

La Consulta Ciudadana Junio 2026 recoge 400 respuestas recibidas, de las cuales 396 fueron clasificadas como válidas e incluidas en el análisis.

Los resultados dibujan una ciudadanía atravesada por presión económica persistente, alta percepción de vigilancia y control, deterioro fuerte de servicios públicos, escepticismo electoral y una demanda casi unánime de priorizar la liberación de presos políticos y el cese de la persecución política.

En economía, 58.6% de las personas incluidas en el análisis afirma que sus ingresos no cubren sus gastos básicos mensuales y 55.8% indica que no logra cubrir la canasta básica de referencia. Además, 71.5% considera que los precios de la canasta básica subieron mucho en los últimos tres meses. Aunque algunos indicadores económicos muestran descensos frente a marzo, su comparabilidad debe leerse con cautela por cambios de categorías y de referencia.

La dimensión de derechos y control social aparece como uno de los núcleos más consistentes del levantamiento. El 83.2% reporta haber detectado algún tipo de vigilancia o control sobre la ciudadanía. Esta percepción convive con reportes sobre vigilancia digital y represión laboral, que fueron revisados para corregir respuestas contradictorias y evitar duplicaciones.

En la agenda política, 99.5% considera muy importante o algo importante priorizar la liberación de presos políticos y el cese de la persecución política, mientras 96.1% considera que la presión internacional puede contribuir a una transición democrática o que su efecto depende de las condiciones. Ambos porcentajes se calculan sobre respuestas sustantivas, es decir, aquellas que expresan una posición definida y excluyen “No sabe / no responde”. Los resultados sitúan los derechos humanos y la expectativa de presión externa en un lugar central de la lectura ciudadana de la crisis.

La expectativa electoral es más limitada: solo 40.1% cree que habrá oportunidad para elecciones libres en 2027. La participación política o social actual alcanza 27.2%. Esta brecha entre demanda de cambio, baja expectativa electoral y participación limitada debe analizarse como una alerta estratégica para actores democráticos y organizaciones de incidencia.

En servicios públicos, la valoración negativa es muy alta. El 84.5% califica negativamente la calidad del sistema de salud pública y 92.9% califica negativamente la educación pública. Además, 91.1% afirma haber observado prácticas de adoctrinamiento político hacia niños, niñas o jóvenes en instituciones educativas.

Ficha metodológica y cierre de base

La Consulta Ciudadana Junio 2026 tuvo un diseño descriptivo y no probabilístico. Recoge las opiniones de las personas que participaron en una sola ronda y no parte de una selección aleatoria de la población. Su objetivo fue conocer sus percepciones sobre la realidad política, social y económica de Nicaragua al cierre del segundo trimestre de 2026.

Se utilizó un formulario de Google con 54 preguntas agrupadas en ocho temas. Incluyó preguntas de una respuesta, preguntas con varias opciones, espacios de respuesta abierta y preguntas de seguimiento que aparecían solo cuando correspondía. El formulario no recopiló direcciones de correo electrónico y las respuestas se analizaron de manera agregada.

Las respuestas incluidas en el análisis fueron recibidas entre el 19 y el 27 de junio de 2026. El formulario registró 400 respuestas; las cuatro primeras fueron clasificadas como pruebas y se excluyeron antes del análisis. No se registraron exclusiones adicionales, por lo que la base final quedó conformada por 396 casos válidos, todos incluidos después del cierre del control de calidad.

Antes del análisis, se comprobó que no hubiera registros duplicados, que las preguntas de seguimiento se respondieran solo cuando correspondía y que se respetara el máximo de opciones permitido. En seis casos, las personas marcaron al mismo tiempo una respuesta negativa y una situación concreta en preguntas sobre represión laboral o vigilancia digital. Para resolver la contradicción, se contaron las situaciones concretas y se ignoró la opción negativa. Las respuestas originales no fueron modificadas y el ajuste quedó documentado en la bitácora de calidad.

También se revisó la información territorial. Se corrigieron diferencias de escritura, acentos y errores evidentes en los nombres de los municipios. Al final se identificaron 40 unidades territoriales. En otras dos respuestas, el campo de municipio contenía información que no correspondía a un lugar y se clasificó como **Sin dato territorial**. Estos casos se mantienen en los resultados generales, pero se excluyen de las comparaciones por territorio. Para el seguimiento del levantamiento, Managua se contabilizó por distritos.

La mayoría de los resultados parte de los 396 casos válidos. Sin embargo, la cantidad de respuestas puede cambiar entre preguntas. Las preguntas de seguimiento incluyen únicamente

a las personas a quienes les correspondía responder, y las opciones No sabe / no responde o Prefiere no responder se excluyen de algunos cálculos cuando así se indica. Por esta razón, cada porcentaje debe leerse junto con el número de respuestas utilizado y no debe asumirse que todos los resultados se calculan sobre 396 casos.

En las preguntas donde se podía elegir más de una respuesta, cada opción se contó por separado. Una misma persona puede aparecer, por tanto, en varias categorías y los porcentajes no necesariamente suman 100%. Las respuestas abiertas y las opciones “Otro” se conservaron en los archivos de trabajo y solo se agruparon cuando existía un criterio claro para hacerlo.

El análisis presenta cantidades y porcentajes para describir las respuestas. También se realizaron comparaciones por edad, sexo/género, situación laboral, ingresos y territorio. Cuando un grupo tiene menos de cinco casos, su resultado no se muestra, porque una base tan pequeña puede producir lecturas inestables y aumentar el riesgo de identificar a las personas.

Para comparar marzo y junio, cada indicador se clasificó con comparabilidad alta, media o no comparable. La clasificación considera si la pregunta, las opciones de respuesta y la forma de calcular el porcentaje se mantuvieron entre ambas rondas. Las diferencias se presentan en puntos porcentuales y no deben interpretarse como prueba de una relación causal.

Debido al carácter no probabilístico de la consulta, los resultados describen a las personas participantes y no representan estadísticamente a toda la población nicaragüense. Por esa razón, no corresponde calcular un margen de error muestral. La composición de las personas consultadas también puede variar entre rondas y contribuir a algunas diferencias entre marzo y junio.

Además, las respuestas recogen percepciones y experiencias declaradas, no verificaciones independientes de cada hecho. Los archivos de trabajo conservan las respuestas originales y las decisiones tomadas durante la revisión y el análisis. Cualquier anexo de publicación debe presentar la información de manera agregada y excluir datos sensibles o que puedan facilitar la identificación de participantes.

Cobertura territorial

La consulta incluyó 40 unidades territoriales en 13 departamentos o regiones: 36 municipios y cuatro distritos de Managua. La distribución fue la siguiente:

Departamento o región	Municipios o distritos incluidos
Carazo	Diriamba y Jinotepe
Chinandega	Chichigalpa, Chinandega, Cinco Pinos, Corinto y El Viejo
Chontales	Juigalpa
Estelí	Condega, Estelí, La Trinidad y San Nicolás
Granada	Diriá, Diriomo, Granada y Nandaime

Jinotega	Jinotega
León	El Jicaral, El Sauce, León, Nagarote, Quezalguaque y Telica
Madriz	Somoto
Managua	Ciudad Sandino, Managua - Distrito I, Managua - Distrito II, Managua - Distrito III, Managua - Distrito IV, Ticuantepe y Villa El Carmen
Masaya	Catarina, Masaya, Niquinohomo y San Juan de Oriente
Matagalpa	Matagalpa
RACCS	Bluefields, El Rama y Nueva Guinea
Rivas	Rivas

Perfil de las personas consultadas

Este capítulo describe la composición de los 396 casos incluidos en el análisis. Los datos permiten comprender desde qué perfiles sociales se construyen los resultados de la consulta, pero no deben interpretarse como una estimación de la estructura demográfica de Nicaragua.

La participación se concentra en edades adultas: 39.1% tiene entre 36 y 50 años y 24.7% entre 26 y 35 años. En conjunto, 63.8% se ubica entre 26 y 50 años. Las personas de 51 a 65 años representan 18.7%, las de 18 a 25 años 11.1% y las de 66 años o más 6.3%. La distribución por sexo/género presenta una participación ligeramente mayor de hombres (53.0%) que de mujeres (46.2%); 0.8% se identifica en otra categoría.

En escolaridad, 35.4% reporta secundaria, 28.0% educación superior y 21.5% formación técnica. La primaria representa 9.6%, el posgrado 4.3% y la ausencia de escolaridad formal 1.3%. En la situación laboral destaca el trabajo por cuenta propia (40.4%), seguido del empleo formal (27.0%) y el empleo informal (17.2%). Las demás situaciones laborales tienen participaciones individuales inferiores al 6%.

Los ingresos mensuales declarados se concentran principalmente en C\$ 7,501-10,999 (28.3%) y C\$ 11,000 o más (36.1%). Otro 19.7% se ubica entre C\$ 5,501 y C\$ 7,500, y 11.6% entre C\$ 3,500 y C\$ 5,500. Estas cifras deben leerse junto con el tamaño del hogar, el número de personas que trabajan y la capacidad de cubrir gastos básicos, desarrollados en el capítulo siguiente.

Resultados gráficos

Las figuras 1, 2, 3 y 28 presentan la distribución por edad, sexo o género, situación laboral e ingresos mensuales. La distribución por escolaridad se incluye en la Figura 27 del anexo gráfico.

Figura 1. Rango de edad

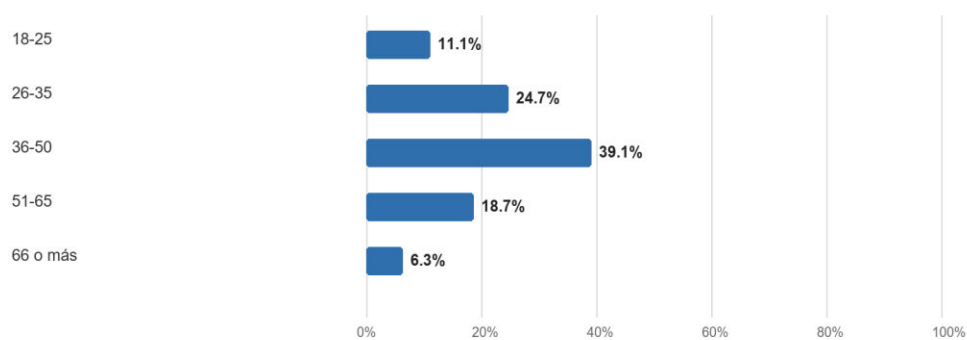


Figura 2. Sexo/género

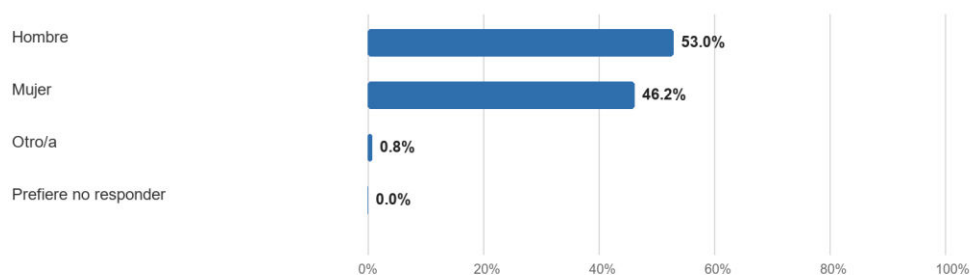


Figura 3. Situación laboral actual

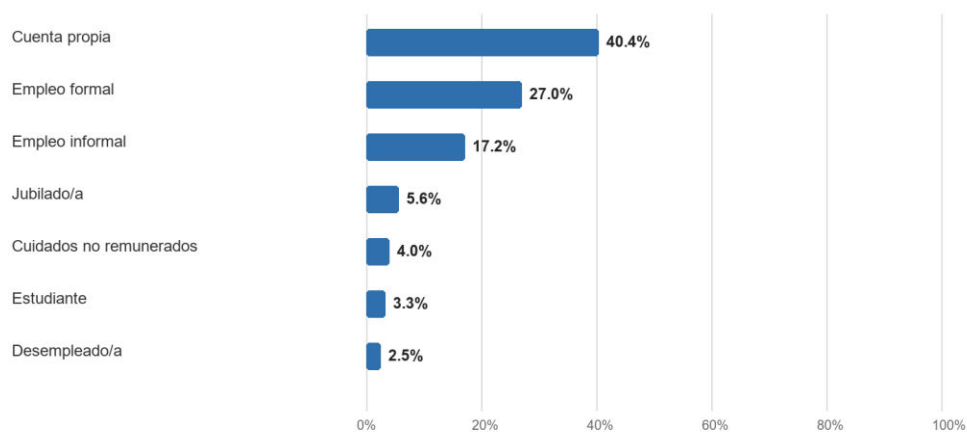
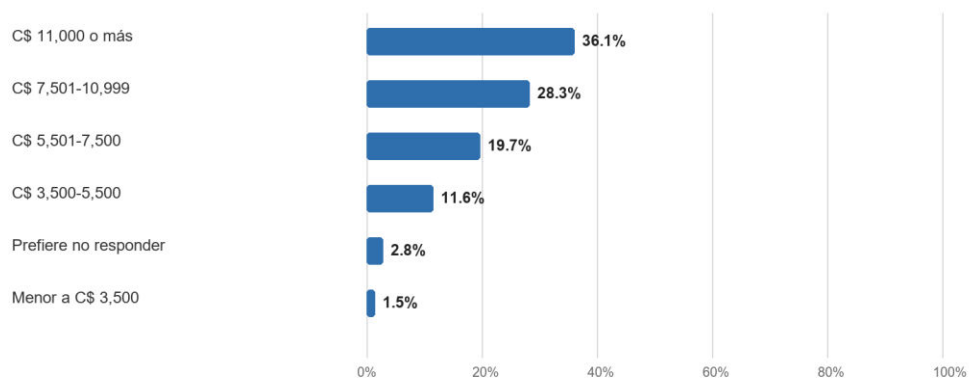


Figura 28. Rango aproximado de ingresos mensuales



Economía y costo de vida



Los hogares consultados se concentran principalmente en núcleos de tres personas (37.9%) y cuatro personas (32.8%); en conjunto, ambos grupos representan 70.7% de los casos. En 42.9% de los hogares trabajan dos personas y en 37.4% trabaja una. En los extremos, 7.1% reporta que no trabaja ninguna persona y 12.6% que trabajan tres o más. Esta composición ayuda a contextualizar la presión económica, aunque no permite calcular por sí sola relaciones de dependencia dentro del hogar.

La capacidad de cubrir necesidades cotidianas es limitada. El 58.6% afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos mensuales, 27.3% señala que los cubre parcialmente y solo 14.1% logra cubrirlos. En conjunto, 85.9% se ubica entre la insuficiencia total y la cobertura parcial. Frente a la canasta básica de referencia de C\$ 21,245.69, 55.6% indica que no puede cubrirla, 33.3% que puede hacerlo parcialmente y 10.6% que sí puede; 0.5% no sabe o no responde.

El cruce por ingresos muestra una diferencia marcada. Entre quienes declaran ingresos mensuales de C\$ 3,500 a C\$ 10,999, la proporción que no cubre sus gastos básicos se sitúa entre 71.8% y 76.8%; entre quienes reportan C\$ 11,000 o más, baja a 28.7%. El tramo menor de C\$ 3,500 no se utiliza para esta comparación porque reúne solo seis casos. La asociación describe a las personas consultadas y no permite establecer que el nivel de ingreso sea la única causa de la capacidad de cobertura.

La percepción de encarecimiento es generalizada: 71.5% considera que los precios de la canasta básica subieron mucho durante los últimos tres meses y 25.5% que subieron poco. Entre las 384 personas que percibieron algún aumento, los productos mencionados con mayor frecuencia fueron la carne (78.1%), los huevos (66.7%), el queso (66.1%), los medicamentos (60.7%), el aceite (56.5%) y los frijoles (53.6%). Como se trata de una pregunta de respuesta múltiple, estos porcentajes no suman 100%.

La evaluación del futuro del país es predominantemente negativa: 81.6% lo valora como malo, 16.2% como regular, 0.3% como bueno y 2.0% no sabe o no responde. Entre quienes respondieron “Mala” o “Regular” (n=387), las causas más señaladas fueron la crisis sociopolítica (62.0%) y la situación económica (60.7%). Con menor frecuencia aparecen la corrupción (21.4%), la inseguridad ciudadana (20.2%), la falta de libertades (19.1%) y la falta de empleo (13.4%). También en este caso podían seleccionarse varias respuestas.

La comparación con marzo requiere distinguir los indicadores. La proporción que considera que los precios subieron mucho disminuye de 83.7% a 71.5%; esta comparación tiene nivel alto porque conserva la referencia temporal y la categoría principal. En cambio, la reducción de quienes no cubren gastos básicos, de 74.2% a 58.6%, tiene comparabilidad media porque junio incorporó la opción Parcialmente. La proporción que no cubre la canasta pasa de 79.7% a 55.8% sobre respuestas sustantivas, pero también tiene comparabilidad media debido al cambio del valor de referencia y a las nuevas opciones de respuesta. La valoración mala del futuro pasa de 96.0% a 83.2% al excluir “No sabe / no responde”, con comparabilidad media porque marzo utilizó una escala binaria.

En conjunto, los resultados describen hogares expuestos a una presión simultánea de ingresos insuficientes y aumento de precios. La valoración negativa del futuro enlaza esta experiencia económica con la crisis sociopolítica.

Resultados gráficos

Las figuras 4 a 6, 16, 17 y 29 muestran la capacidad para cubrir gastos y la canasta básica, el aumento de precios, los productos más encarecidos y la valoración del futuro del país.

Figura 4. ¿Cubre gastos básicos mensuales?

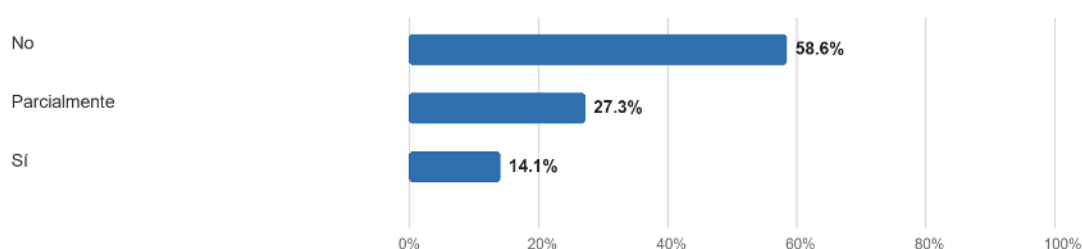


Figura 5. Percepción de aumento de precios

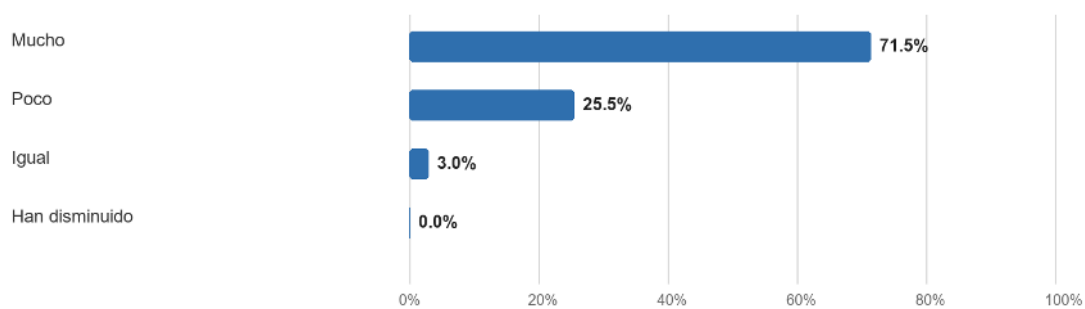


Figura 6. ¿Ingresos cubren canasta básica?

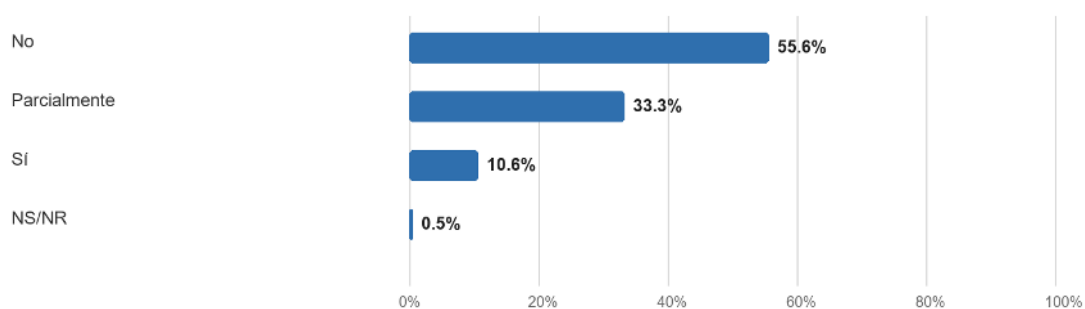


Figura 16. Productos que más se han encarecido

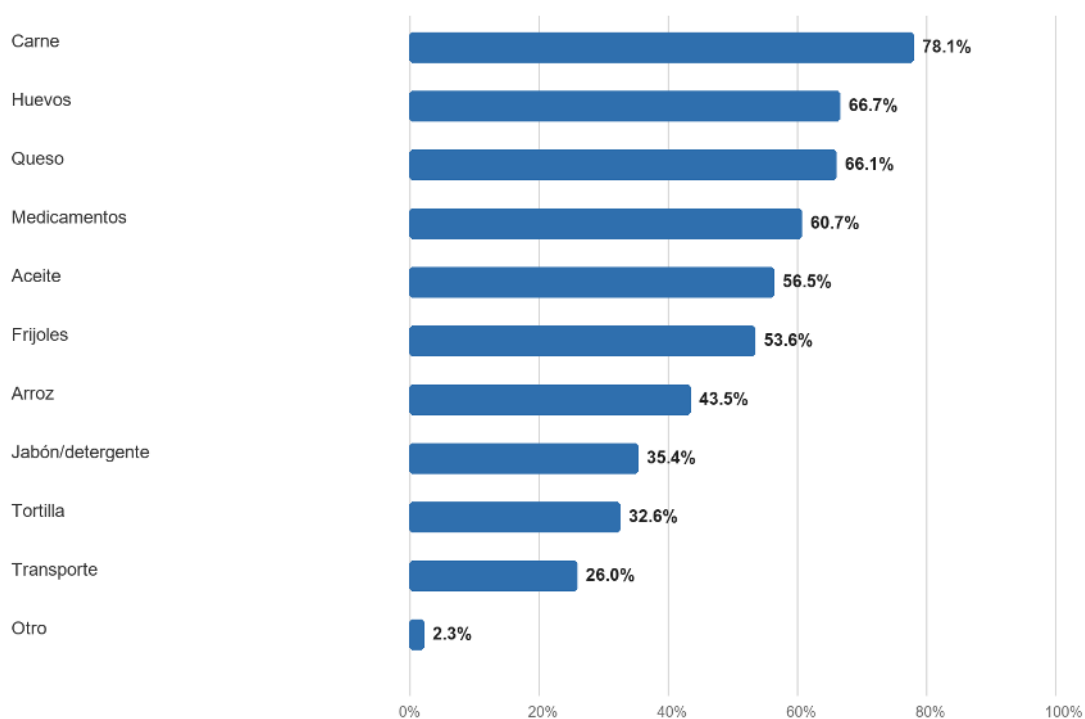


Figura 17. Causas de valoración negativa o regular del futuro

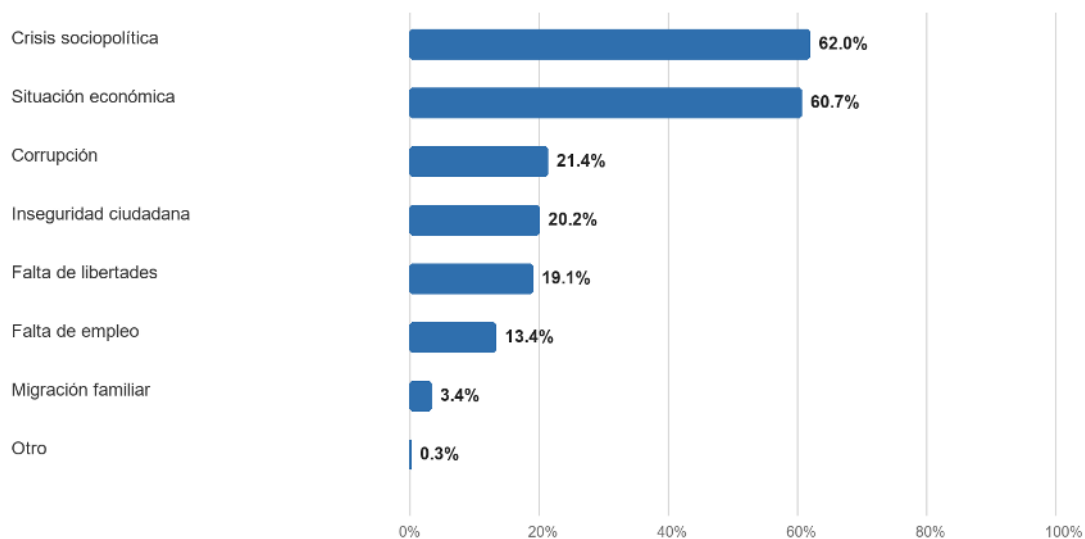
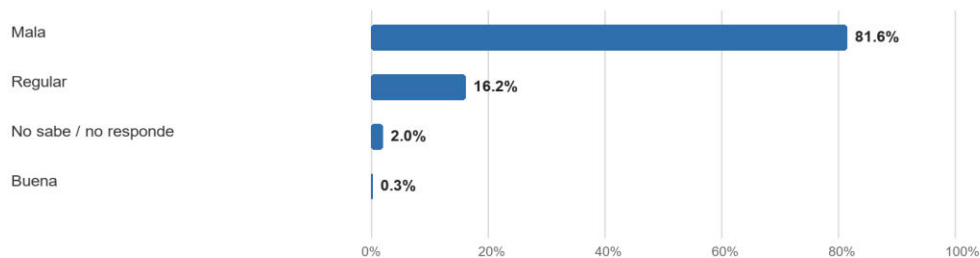


Figura 29. Percepción sobre el futuro del país



Migración y remesas



La intención de emigrar continúa siendo elevada. Sobre los 396 casos incluidos, 54.0% responde que se iría del país si pudiera, 39.6% que no lo haría y 6.3% no sabe o no responde. Al excluir las 25 respuestas “No sabe / no responde”, la intención migratoria alcanza 57.7%. Esta última

proporción es la utilizada para la comparación longitudinal, mientras que la figura descriptiva conserva todas las categorías de respuesta.

La intención de emigrar presenta diferencias claras por edad y situación laboral. Alcanza 86.4% entre las personas de 18 a 25 años y disminuye progresivamente hasta 10.0% entre quienes tienen 66 años o más. También es más alta entre quienes tienen empleo informal (78.1%) que entre quienes cuentan con empleo formal (61.5%) o trabajan por cuenta propia (50.0%). Estos cruces describen asociaciones dentro de la consulta y no demuestran que la edad o la situación laboral determinen por sí solas la decisión de emigrar.

Entre las personas que manifestaron intención de emigrar, 213 indicaron un destino. Estados Unidos concentra 57.3% de esas respuestas, seguido de Costa Rica (19.7%) y España (18.8%); Panamá y otros destinos representan proporciones menores. Las razones para emigrar fueron de selección múltiple. La situación económica aparece en 75.2% de los casos, seguida de la desesperanza por la crisis política (42.1%). La falta de empleo y la falta de libertades alcanzan 22.0% cada una, mientras el acoso o intimidación es mencionado por 8.4%. Estos porcentajes no suman 100% porque cada persona podía señalar más de una razón.

La migración efectivamente reportada en el entorno familiar tiene una magnitud distinta de la intención: 16.7% señala que alguien de su familia migró durante los últimos tres meses y 83.3% que no ocurrió. Entre las 65 respuestas efectivas sobre la edad de la persona que migró, 61.5% corresponde al rango de 20 a 35 años y 32.3% al de 36 a 50 años. En conjunto, 93.8% se concentra entre los 20 y 50 años, aunque este resultado debe interpretarse teniendo presente el menor tamaño de esta submuestra.

Las remesas forman parte de la economía de 40.7% de los hogares consultados, mientras 59.3% afirma no recibirlas. Entre los 160 hogares que identifican el país de procedencia, Estados Unidos representa 59.4%, Costa Rica 21.3% y España 15.6%; Panamá y otros países reúnen el porcentaje restante. La pregunta identifica recepción y procedencia, pero no permite medir montos, frecuencia ni grado de dependencia económica de las remesas.

La recepción de remesas también difiere por sexo/género: 49.2% de las mujeres consultadas reporta recibirlas, frente a 33.8% de los hombres. Las otras categorías no se presentan porque reúnen menos de cinco casos. Esta diferencia no permite identificar por sí sola las causas de la recepción ni el grado de dependencia económica.

Los tres indicadores longitudinales de esta sección tienen comparabilidad alta. La intención de emigrar entre respuestas sustantivas disminuye de 66.4% en marzo a 57.7% en junio, una variación de -8.7 puntos porcentuales. La migración familiar reciente pasa de 20.3% a 16.7% (-3.6 puntos) y los hogares que reciben remesas de 43.1% a 40.7% (-2.5 puntos). Estas diferencias describen el cambio entre ambas rondas, pero no deben interpretarse automáticamente como una tendencia poblacional debido al carácter no probabilístico de la consulta y a posibles diferencias en la composición de las personas participantes.

En conjunto, la migración permanece como una estrategia contemplada por una proporción amplia de las personas consultadas y se relaciona principalmente con motivos económicos y de desesperanza política. La presencia de migración familiar reciente y remesas confirma que el fenómeno también forma parte de la experiencia concreta de numerosos hogares, aunque la consulta no permite establecer relaciones causales entre intención de emigrar, salida efectiva y recepción de remesas.

Resultados gráficos

Las figuras 7 a 9, 18, 30 y 31 presentan la intención de emigrar, la migración familiar reciente, la recepción y procedencia de remesas, los destinos migratorios y las razones para salir del país.

Figura 7. Si pudiera irse del país, ¿lo haría?

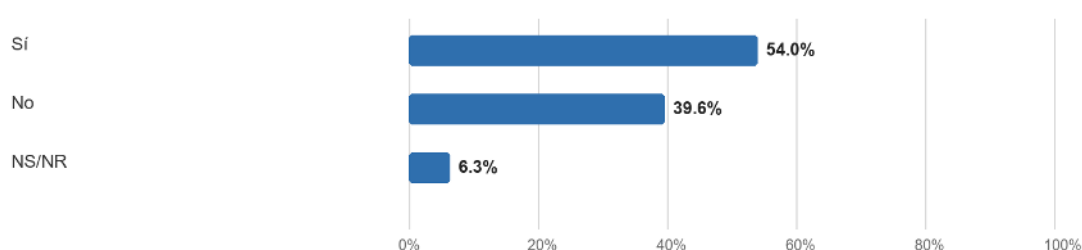


Figura 8. Migración familiar reciente

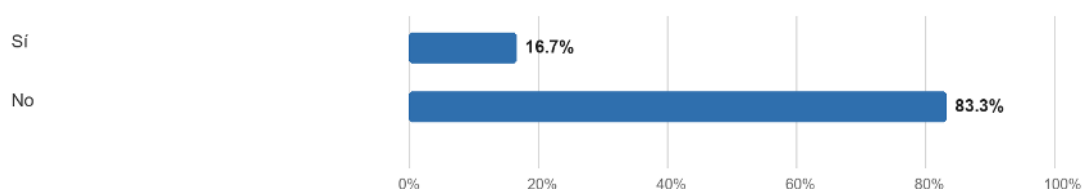


Figura 9. Hogares que reciben remesas

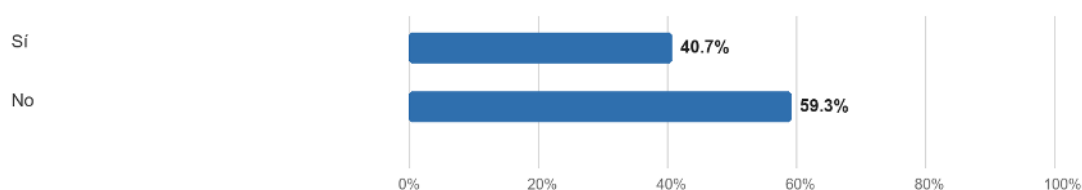


Figura 18. Razones para emigrar

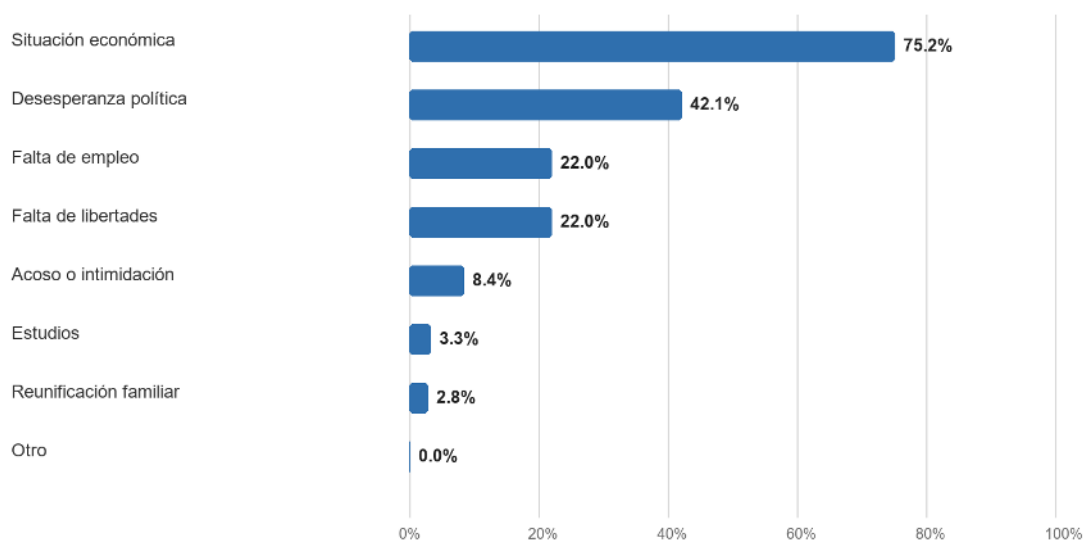


Figura 30. País al que emigraría

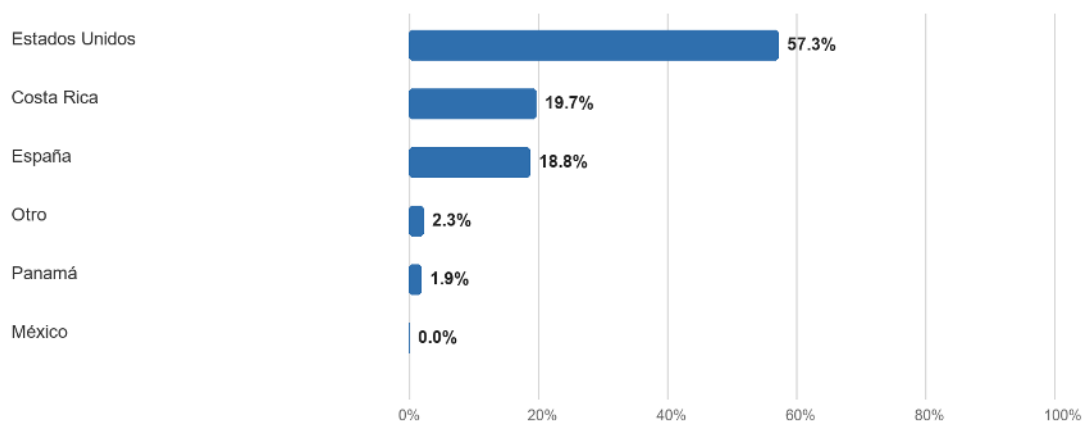
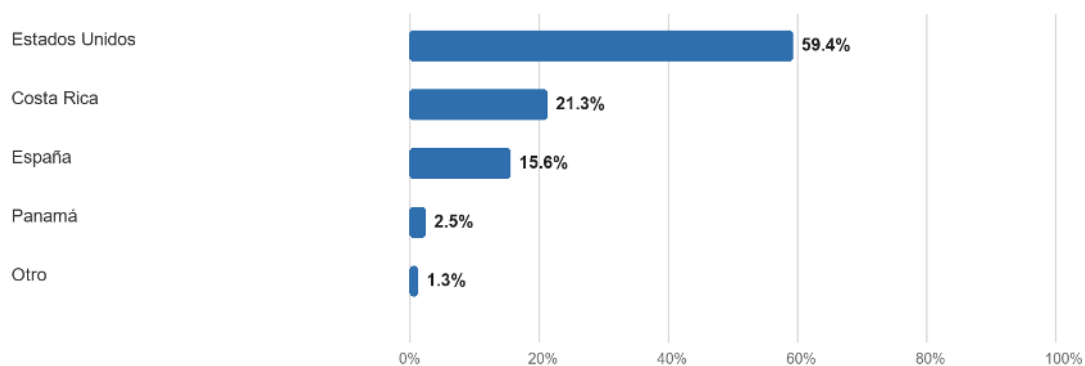


Figura 31. País de procedencia de remesas



Control, vigilancia y represión



El 36.1% de las personas consultadas afirma tener familiares trabajando en instituciones del Estado, 60.9% responde que no y 3.0% prefiere no responder. Si se excluye esta última categoría, la proporción afirmativa alcanza 37.2%. Este dato permite dimensionar la cercanía familiar con el empleo público dentro de la consulta, pero no identifica la institución, el cargo ni la situación laboral de esos familiares.

Entre las 143 personas elegibles por tener familiares en instituciones estatales, 141 respondieron sobre formas de represión laboral conocidas. La asistencia obligatoria a actividades partidarias es la mención más frecuente (83.7%), seguida de despidos o amenazas de despido (44.7%), vigilancia de redes sociales (40.4%), intimidación o amenazas (31.2%), asistencia a entrenamientos o actividades político-militares (27.0%) y revisión de celulares (19.9%). Un 9.9% señala no haber escuchado casos. La pregunta fue de respuesta múltiple y recoge situaciones reportadas por las personas consultadas, no una verificación independiente de cada hecho.

La percepción de vigilancia o control sobre la ciudadanía es amplia. Sobre el total de 396 casos, 81.1% afirma haberla detectado en su entorno, 16.4% responde que no y 2.5% no sabe o no responde. Al considerar únicamente las 386 respuestas sustantivas, el indicador alcanza 83.2%. Entre las 320 personas que identificaron actores, las estructuras CPC o partidarias son mencionadas por 62.5%, la Policía por 39.7%, los paramilitares por 36.6%, vecinos o informantes por 35.9% y funcionarios públicos por 16.9%. Estas categorías tampoco son excluyentes.

En el ámbito digital, 49.0% selecciona que no ha detectado vigilancia. Entre las modalidades concretas reportadas sobre el total de casos aparecen perfiles falsos solicitando información privada (21.0%), intentos de hackeo (15.9%), amenazas u hostigamiento en redes sociales (13.1%), intervención o monitoreo de llamadas o mensajes (8.1%), suplantación de identidad (4.5%) y revisión o confiscación de dispositivos (3.0%). Debido al formato de respuesta múltiple, el 49.0% no debe interpretarse mediante una resta simple como una tasa complementaria de vigilancia digital.

Los resultados de este capítulo aplican el criterio definido durante el cierre de calidad para seis respuestas contradictorias en las preguntas sobre represión laboral y vigilancia digital. Cuando una opción negativa aparecía junto con una situación concreta, se contabilizó la situación concreta y no la opción negativa. Las respuestas originales no fueron modificadas y la decisión permanece documentada en la bitácora de cierre.

En la comparación longitudinal, la proporción de personas con familiares en instituciones del Estado pasa de 41.4% en marzo a 37.2% en junio, luego de excluir “Prefiere no responder”. La diferencia es de -4.1 puntos porcentuales y la comparabilidad es alta. La detección de vigilancia o control pasa de 86.0% a 83.2% (-2.8 puntos), pero su comparabilidad es media porque junio amplió la redacción para incluir control sobre la ciudadanía. Esta variación debe leerse con mayor cautela que la primera.

En conjunto, los resultados describen una percepción de control que atraviesa ámbitos laborales, comunitarios, institucionales y digitales. La coincidencia de menciones en varios espacios muestra la amplitud del fenómeno percibido, aunque la consulta no permite verificar individualmente los hechos ni establecer responsabilidades más allá de lo reportado por las personas participantes.

Resultados gráficos

Las figuras 10, 19 y 20 presentan la percepción de vigilancia o control, los tipos de represión laboral y los actores señalados como responsables. La Figura 21, sobre vigilancia digital, se encuentra en el anexo gráfico.

Figura 10. Vigilancia o control ciudadano

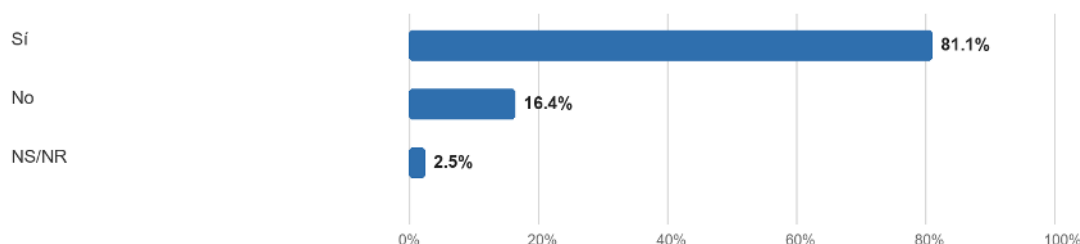


Figura 19. Tipos de represión laboral reportados

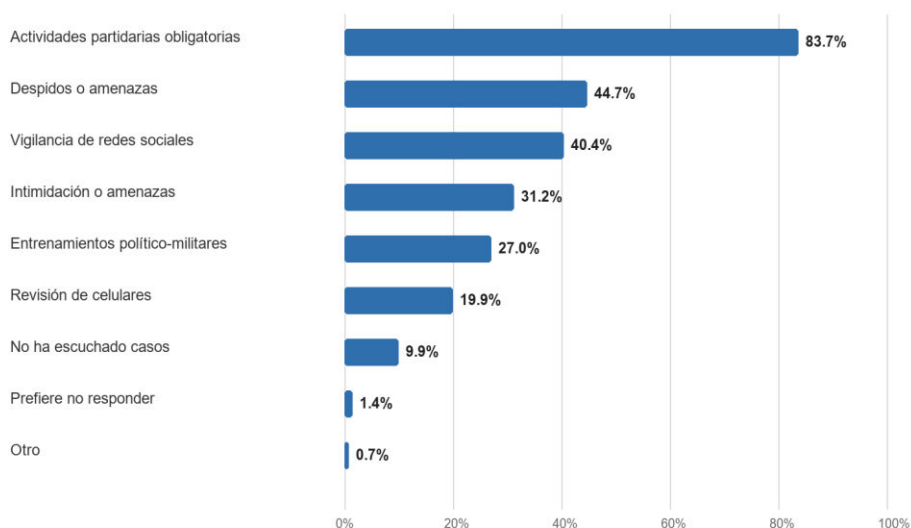
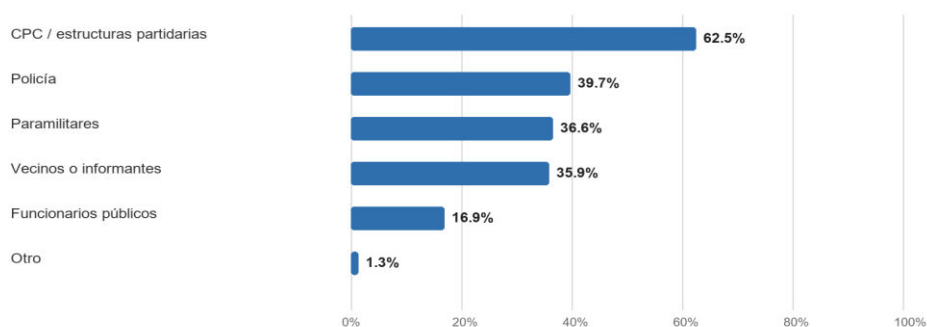


Figura 20. Actores que ejercen vigilancia o control



Coyuntura política y presos políticos



El 98.2% de las personas consultadas considera muy importante (83.3%) o algo importante (14.9%) priorizar la liberación de presos políticos y el cese de la persecución política en cualquier salida a la crisis nacional. Solo 0.6% lo califica como poco o nada importante y 1.3% no sabe o

no responde. Este resultado constituye uno de los consensos más amplios de la ronda y sitúa esta demanda como una condición central de legitimidad para cualquier salida política.

Ante la pregunta sobre el caso de Brooklyn Rivera, 51.3% considera que demuestra la responsabilidad directa de la dictadura Ortega-Murillo en la muerte de presos políticos y 37.9% que evidencia la gravedad de la persecución política y la desaparición forzada. En conjunto, 89.2% interpreta el caso desde alguna de estas dos dimensiones. Un 4.5% indica que no conoce el caso y 3.0% prefiere no responder. Estas cifras recogen las valoraciones de las personas consultadas y deben leerse como percepciones ciudadanas sobre el caso.

El conocimiento sobre acontecimientos recientes en la Costa Caribe es más limitado. El 39.4% afirma haber escuchado información sobre conflictos, represión o afectaciones a comunidades indígenas, mientras 35.6% responde que no y 25.0% no sabe o no responde. La combinación de desconocimiento y falta de respuesta muestra una brecha informativa importante, aun cuando el caso de Brooklyn Rivera genera una lectura política definida entre quienes sí se pronuncian.

El 65.9% considera que la presión internacional puede contribuir a una transición democrática y 27.3% señala que depende de las condiciones; sumadas, ambas respuestas representan 93.2% del total. Solo 3.8% responde que no y 3.0% no sabe o no responde. El dato refleja una expectativa ampliamente extendida, pero no incondicional: más de una cuarta parte vincula su posible eficacia con la forma y las circunstancias en que se ejerza.

Para la comparación longitudinal se utiliza únicamente la respuesta afirmativa entre quienes emitieron una respuesta sustantiva: 68.0% en junio, frente a 71.7% en marzo, una disminución de 3.7 puntos porcentuales. La comparabilidad es media, porque en marzo la pregunta se refería específicamente a Estados Unidos y en junio se amplió a la presión internacional. Por ello, la variación debe interpretarse con cautela y no como un cambio concluyente de opinión.

En cuanto a las acciones internacionales consideradas más útiles, 44.9% prefiere una intervención más directa de Estados Unidos u otros actores internacionales. Le siguen el acompañamiento a una negociación política (24.0%), la presión diplomática (14.1%) y las sanciones a funcionarios responsables de abusos (10.4%). Solo 3.5% considera que ninguna acción sería útil. La distribución muestra mayor inclinación por acciones directas, aunque también existe respaldo a mecanismos de negociación y diplomacia.

Las expectativas sobre una eventual mayor presión de Estados Unidos combinan esperanza y cautela. El 52.8% cree que una nueva ruta de presión podría contribuir a una transición democrática, mientras 27.3% piensa que podría provocar un endurecimiento de la dictadura Ortega-Murillo y aumentar la represión; 11.6% considera que el resultado depende de la evolución de la política regional estadounidense. Al preguntar por el efecto más probable de un aumento de presión, 49.5% espera que acelere una negociación o transición, pero 38.9% anticipa un endurecimiento del régimen y 6.3% teme que afecte principalmente a la población. La cercanía entre estas posiciones confirma que el apoyo a la presión externa convive con una percepción significativa de sus riesgos.

Finalmente, 63.6% considera que el conflicto entre Estados Unidos/Israel e Irán entorpece las posibilidades de solución a la crisis nicaragüense porque distrae la atención internacional. Un 18.2% cree que podría ayudar al aumentar la presión sobre aliados de Irán, 6.8% lo considera desvinculado de Nicaragua y 11.4% no sabe o no responde. En conjunto, el capítulo muestra un consenso muy amplio alrededor de los derechos de las personas presas políticas, junto con expectativas condicionadas sobre la acción internacional y una brecha de información respecto de la Costa Caribe.

Resultados gráficos

Las figuras 32 a 37, 51 y 52 reúnen los resultados sobre presos políticos, el caso de Brooklyn Rivera, la presión internacional, las acciones externas consideradas más útiles y el efecto del contexto regional e internacional sobre Nicaragua.

Figura 32. Prioridad de presos políticos y cese de persecución

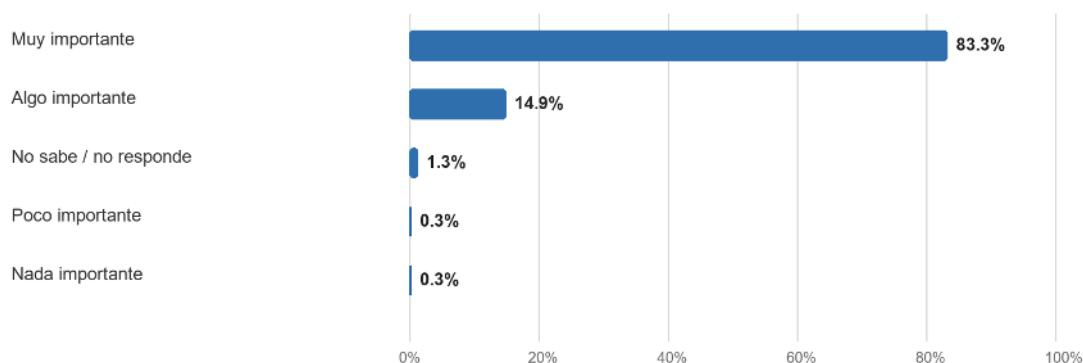


Figura 33. Opinión sobre el caso Brooklyn Rivera

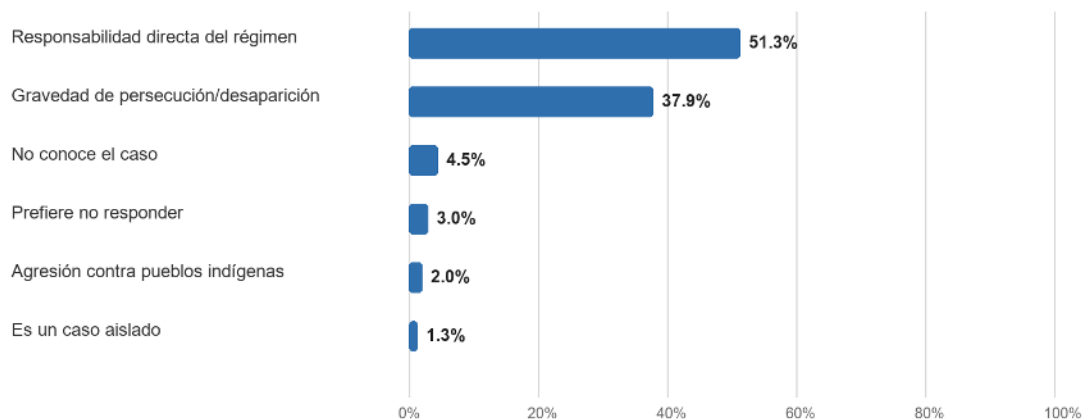


Figura 34. Presión internacional y transición democrática

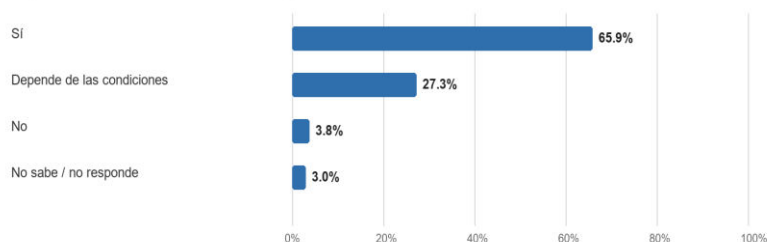


Figura 35. Acción internacional considerada más útil

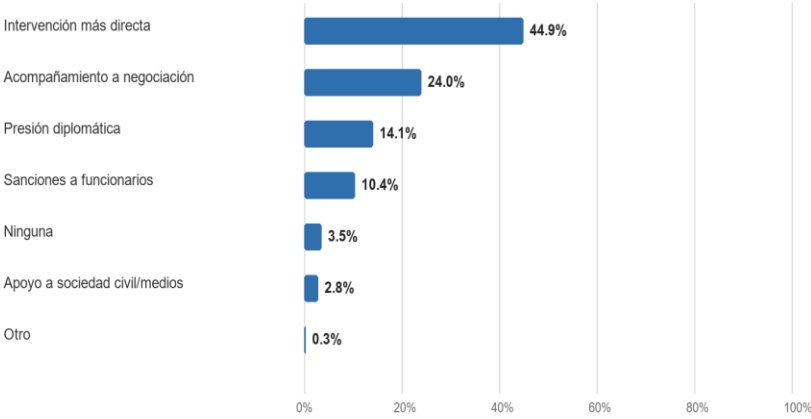


Figura 36. Ruta de mayor presión de EE. UU.

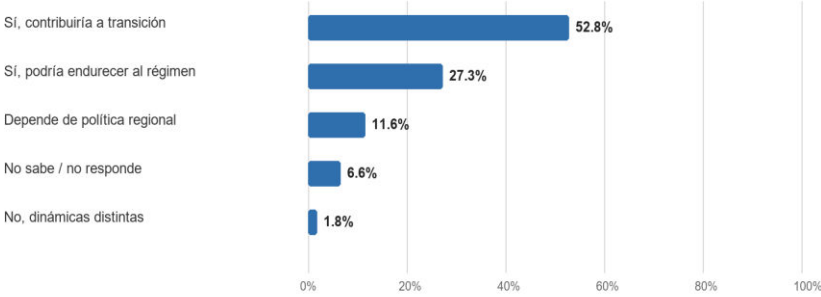


Figura 37. Efecto probable de mayor presión de EE. UU.

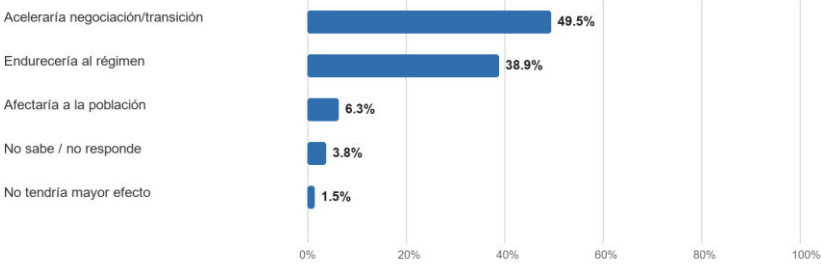


Figura 51. Información sobre conflictos en la Costa Caribe

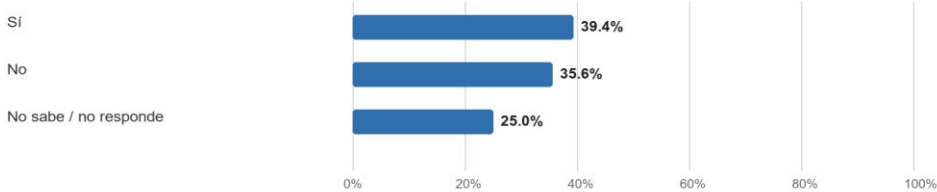
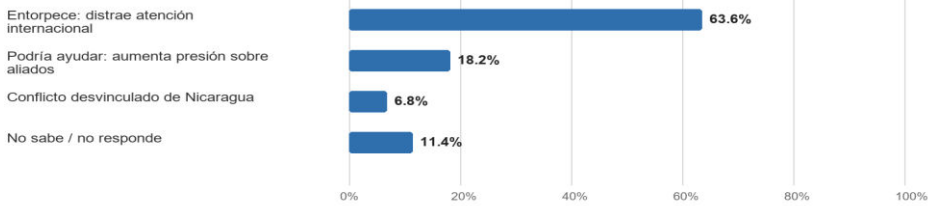


Figura 52. Conflicto internacional y crisis nicaragüense



Elecciones y participación



Las expectativas sobre la posibilidad de celebrar elecciones libres en 2027 son limitadas. Del total de 396 personas consultadas, 33.1% responde que sí habrá oportunidad, 49.5% considera que no y 17.4% no sabe o no responde. Si se excluye esta última categoría, la respuesta afirmativa representa 40.1% de las 327 respuestas sustantivas, frente a 59.9% que no espera condiciones electorales libres.

El cruce por edad muestra una diferencia particular: 65.6% de las personas de 18 a 25 años espera elecciones libres, frente a proporciones de 20.8% a 41.9% en los demás grupos etarios. La relación no es lineal entre todos los rangos de edad, por lo que debe leerse como una mayor expectativa específica del grupo más joven y no como una tendencia general asociada a la edad.

En marzo, 55.6% esperaba elecciones libres en 2027, mientras en junio el indicador homologado se ubica en 40.1%, una reducción de 15.6 puntos porcentuales. La comparación tiene un nivel alto de comparabilidad porque la pregunta es equivalente, aunque junio incorpora explícitamente la opción “No sabe / no responde”. La disminución señala un deterioro importante de la expectativa electoral entre ambas rondas.

Al consultar qué condiciones serían necesarias para considerar libres esas elecciones, 63.6% menciona el restablecimiento de las libertades públicas y 55.6% la liberación de presos políticos. También destacan la observación electoral independiente (50.5%), la reforma del Consejo Supremo Electoral (49.7%) y la participación libre de partidos y movimientos opositores (47.5%). El registro electoral transparente es seleccionado por 31.1%. Al tratarse de una pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100% y cada resultado expresa la proporción que seleccionó esa condición.

La participación actual es minoritaria. El 25.5% del total afirma participar en algún movimiento político, social o partido político, 68.2% responde que no y 6.3% prefiere no responder. Entre las 371 personas que respondieron Sí o No, la participación alcanza 27.2%. En marzo este indicador

fue 25.1%, lo que representa un aumento de 2.2 puntos porcentuales; sin embargo, la comparabilidad es media porque en junio la pregunta amplió el alcance para incluir movimientos sociales.

Entre las 270 personas que indicaron que actualmente no participan, 14.4% expresa interés en hacerlo y 41.9% responde “Tal vez”; en conjunto, ambas categorías equivalen a 56.3% de ese grupo. Por otro lado, 37.4% no tiene interés, 5.9% prefiere no responder y se registra una respuesta faltante. La categoría “Tal vez” constituye el segmento más numeroso y refleja una disposición potencial, pero todavía condicionada o no definida.

La comparación longitudinal del interés en participar debe leerse con especial cautela. El indicador afirmativo pasa de 45.8% en marzo a 15.4% en junio al excluir “Prefiere no responder”, pero la comparabilidad es media porque junio añadió las opciones “Tal vez” y “Prefiere no responder”. Parte de la diferencia puede deberse a que personas que antes habrían escogido una respuesta afirmativa ahora cuentan con una alternativa intermedia; por ello, no corresponde interpretar la caída como una contracción equivalente del interés ciudadano.

En conjunto, los resultados muestran una baja expectativa sobre la existencia de elecciones libres en 2027 y una participación organizada actualmente limitada. Sin embargo, también identifican condiciones concretas que las personas consideran indispensables para un proceso electoral creíble y un grupo amplio de no participantes que manifiesta interés o apertura eventual. La distancia entre esa apertura y la participación efectiva es una línea relevante para analizar las barreras, garantías y canales de vinculación política disponibles.

Resultados gráficos

Las figuras 11, 22, 38 y 39 presentan las expectativas sobre elecciones libres, las condiciones consideradas necesarias y los niveles actuales y potenciales de participación política o social.

Figura 11. ¿Habrá oportunidad para elecciones libres en 2027?

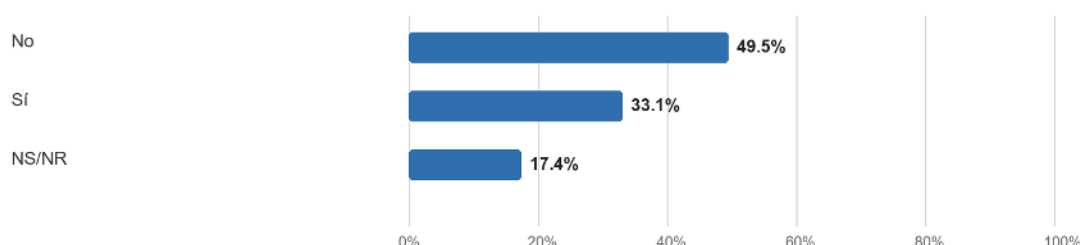


Figura 22. Condiciones necesarias para elecciones libres

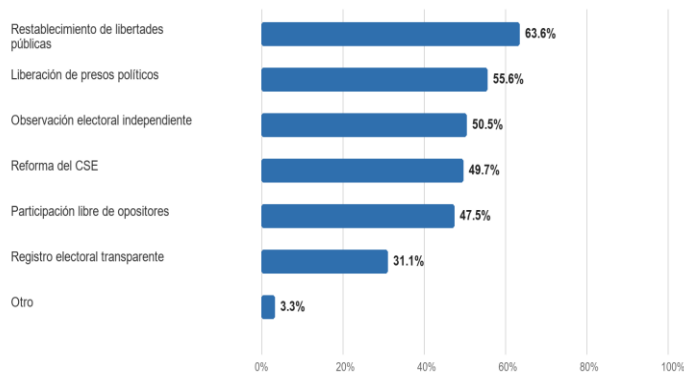


Figura 38. Participación actual en movimiento o partido

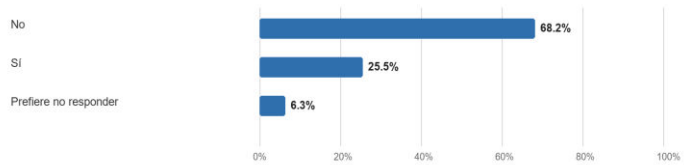
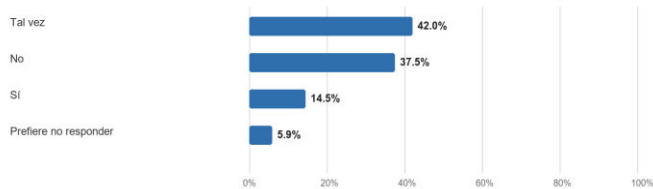


Figura 39. Interés en participar entre quienes no participan



Corrupción e inseguridad



El conocimiento reportado de hechos de corrupción municipal es elevado. Del total de 396 personas consultadas, 69.9% afirma haber conocido actos de corrupción ejecutados por funcionarios públicos en su municipio durante los últimos tres meses, 22.2% responde que no y

7.8% no sabe o no responde. Entre las 365 personas que respondieron Sí o No, la proporción afirmativa alcanza 75.9%.

Entre las 277 personas que reportan conocer estos hechos, las modalidades mencionadas con mayor frecuencia son el uso indebido de bienes públicos (67.5%) y el nepotismo (61.7%). Les siguen las licitaciones amañadas (37.9%), la malversación de fondos públicos (31.8%), los sobresueldos (15.2%) y los cobros ilegales (13.4%). Como se permitía seleccionar varias opciones, los porcentajes no suman 100% y describen la proporción de este grupo que identificó cada práctica.

En la comparación longitudinal, el indicador sustantivo de conocimiento de corrupción municipal pasa de 77.9% en marzo a 75.9% en junio, una disminución de 2.1 puntos porcentuales. La comparabilidad es alta porque ambas mediciones utilizan el mismo período de referencia de tres meses. La variación es pequeña y muestra que el fenómeno continúa siendo reportado por aproximadamente tres de cada cuatro personas incluidas en el cálculo.

La percepción sobre la inseguridad es todavía más extendida. El 82.8% del total considera que la inseguridad ciudadana aumentó en los últimos tres meses, 16.7% señala que se mantiene igual y apenas 0.3% que disminuyó; otro 0.3% no sabe o no responde. Al excluir esta última categoría, el indicador de aumento se ubica en 83.0%. En marzo había sido 76.4%, por lo que se registra un incremento de 6.6 puntos porcentuales con comparabilidad alta.

El aumento de la inseguridad es percibido por 88.5% de las mujeres y 78.6% de los hombres consultados, una diferencia de 9.9 puntos porcentuales. Las demás categorías de sexo/género se omiten en este cruce porque reúnen menos de cinco casos. El resultado identifica una diferencia dentro de la consulta, pero no permite explicar sus causas ni generalizar a toda la población.

Al preguntar por los actos de criminalidad considerados más comunes, el robo aparece como la mención dominante, con 82.6% del total. A distancia se ubican los asesinatos (36.9%), el hurto (36.1%), los femicidios (33.8%) y la venta o consumo de drogas (33.3%). También se mencionan el acoso callejero (20.5%), las violaciones (13.6%) y la extorsión (5.8%). Esta pregunta admitía respuestas múltiples, por lo que cada porcentaje representa la proporción que seleccionó esa categoría y no una distribución que deba sumar 100%.

En conjunto, los resultados muestran dos preocupaciones territoriales persistentes. El conocimiento reportado de corrupción municipal se mantiene en niveles altos y se concentra especialmente en prácticas relacionadas con el uso de recursos públicos y el nepotismo. Al mismo tiempo, aumenta la percepción de inseguridad y el robo sobresale claramente entre los delitos señalados. Estos resultados expresan experiencias y percepciones de las personas consultadas; no sustituyen registros administrativos ni permiten estimar por sí solos la incidencia real de corrupción o criminalidad.

Resultados gráficos

Las figuras 12, 23, 24 y 40 muestran la percepción de inseguridad, los hechos de corrupción municipal y los actos de criminalidad mencionados por las personas consultadas.

Figura 12. Percepción sobre inseguridad ciudadana

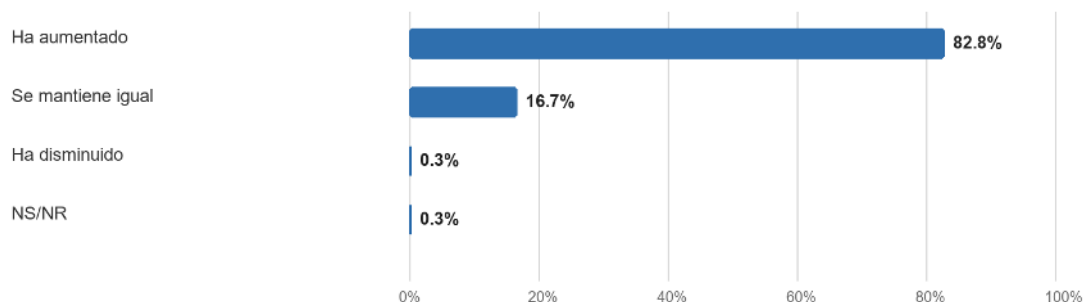


Figura 23. Tipos de corrupción conocidos

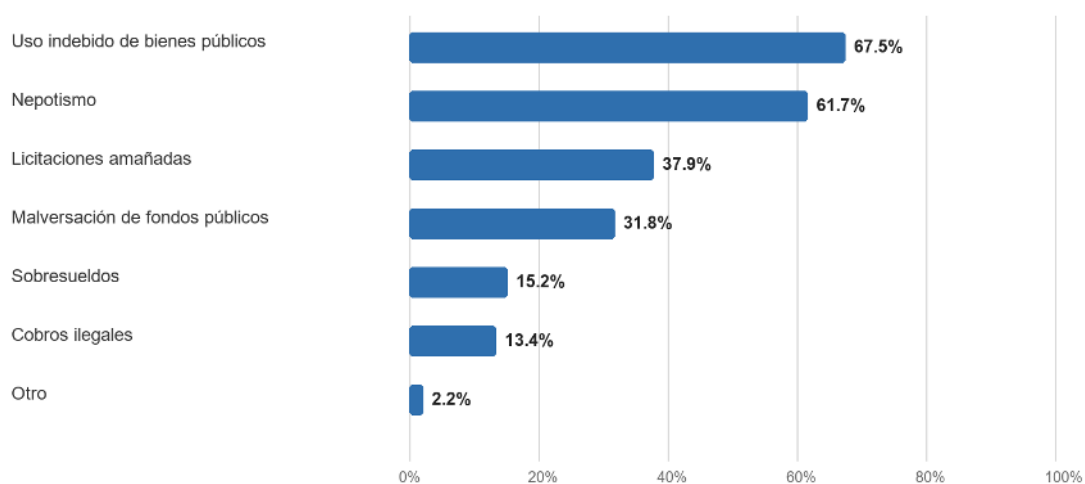


Figura 24. Actos de criminalidad más comunes

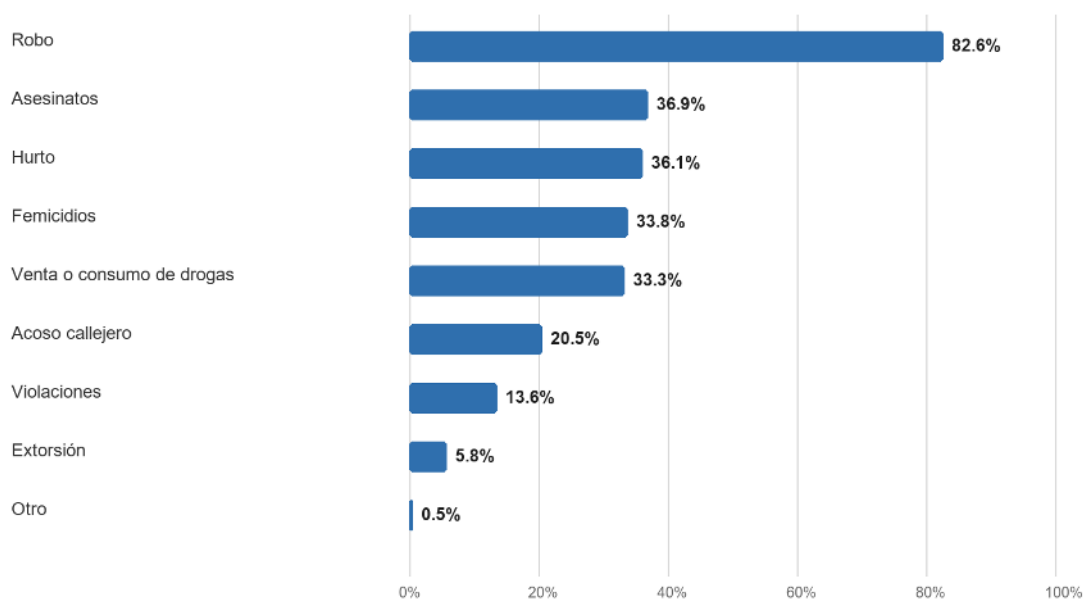
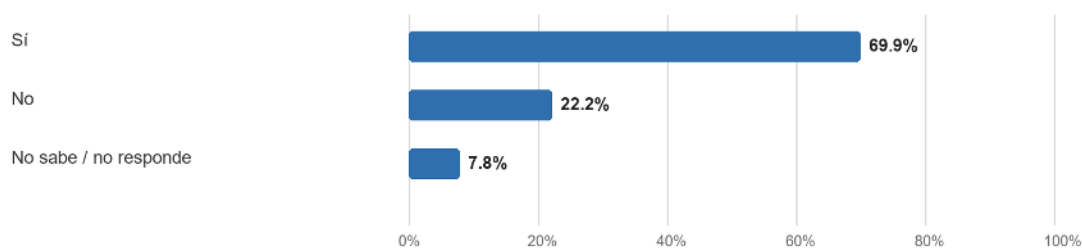


Figura 40. Conocimiento de corrupción municipal reciente



Servicios públicos: salud y educación



La valoración de la salud pública es ampliamente negativa. Del total de 396 personas consultadas, 57.3% califica el sistema como malo y 26.8% como muy malo, para un 84.1% conjunto. En contraste, 15.4% lo considera bueno o muy bueno y 0.5% no sabe o no responde. Al excluir esta última categoría, la valoración negativa alcanza 84.5% entre las 394 personas que calificaron el sistema.

La percepción de condicionamiento político en la atención sanitaria es todavía más extendida. El 94.4% del total considera que la atención está condicionada políticamente, 4.8% la percibe como imparcial y 0.8% no sabe o no responde. Al excluir “No sabe / no responde”, el indicador se eleva a 95.2%.

Ambos indicadores de salud empeoran respecto de marzo y tienen comparabilidad alta. La valoración negativa pasa de 81.2% a 84.5%, un aumento de 3.3 puntos porcentuales. La percepción de atención condicionada políticamente crece de 87.5% a 95.2%, una variación de 7.7 puntos, la más pronunciada de este bloque.

La educación pública recibe una evaluación aún más desfavorable. El 58.3% la califica como mala y 34.3% como muy mala, lo que equivale a 92.6% del total. Solo 7.1% la valora como buena o muy buena y 0.3% no sabe o no responde. Entre las 395 personas que calificaron el sistema, la valoración negativa alcanza 92.9%, frente a 89.2% en marzo, un incremento de 3.7 puntos porcentuales con comparabilidad alta.

Entre las 367 personas que califican la educación como mala o muy mala, 84.7% atribuye esa valoración a la partidización del sistema educativo. Le siguen la poca preparación de los docentes (41.7%), las deficiencias del programa académico (29.2%), la falta de recursos (9.8%) y el deterioro de infraestructura (3.3%). Esta pregunta permitía respuestas múltiples, por lo que los porcentajes no suman 100%.

El 90.4% del total afirma haber sido testigo de prácticas de adoctrinamiento político hacia niños, niñas o jóvenes en instituciones educativas, 8.8% responde que no y 0.8% no sabe o no responde. Al excluir “No sabe / no responde”, la proporción afirmativa es 91.1%. En marzo fue 87.0%, de modo que aumenta 4.1 puntos porcentuales; la comparación es alta porque las preguntas son equivalentes en su contenido.

Entre quienes reportaron haber observado adoctrinamiento y respondieron la pregunta de seguimiento, 68.3% considera que ocurre tanto en instituciones públicas como privadas, 30.9% únicamente en instituciones públicas y 0.8% solo en instituciones privadas. La base de esta distribución es de 356 respuestas efectivas, con dos omisiones entre las 358 personas elegibles.

En conjunto, los resultados describen una valoración muy crítica de la salud y la educación públicas, acompañada por una percepción creciente de politización. En educación, la partidización aparece como la causa más mencionada del deterioro y el adoctrinamiento es reportado por una mayoría muy amplia. Estas cifras expresan las percepciones y experiencias declaradas por las personas consultadas y no sustituyen evaluaciones técnicas de calidad ni registros administrativos de los servicios.



Resultados gráficos

Las figuras 13 a 15, 25, 41 y 42 presentan la valoración de la salud y la educación públicas, el condicionamiento político de la atención sanitaria y las prácticas de adoctrinamiento reportadas.

Figura 13. Valoración del sistema de salud pública

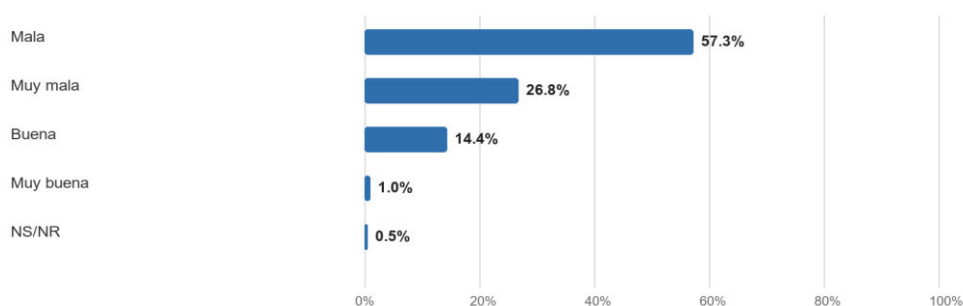


Figura 14. Valoración del sistema de educación pública

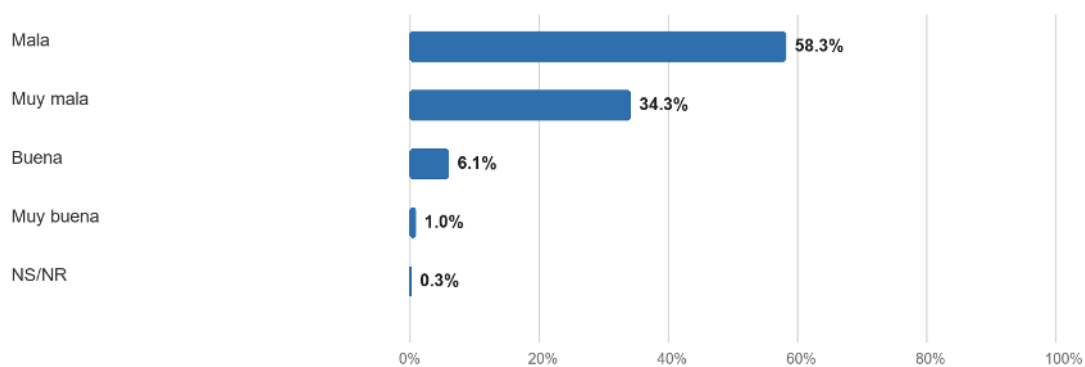


Figura 15. Adoctrinamiento político en instituciones educativas

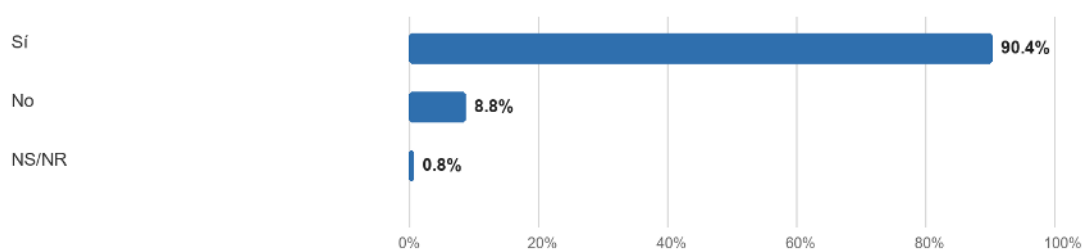


Figura 25. Causas de mala educación pública

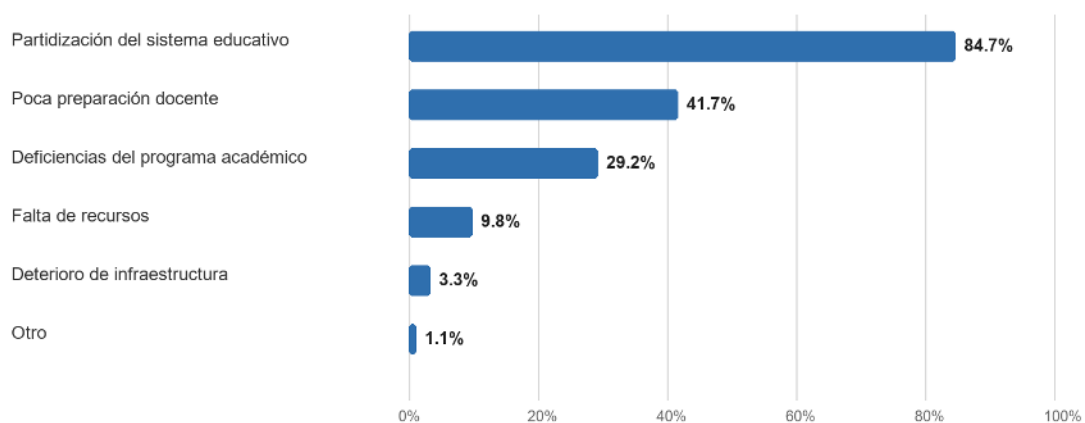


Figura 41. Atención en salud: condicionada políticamente o imparcial

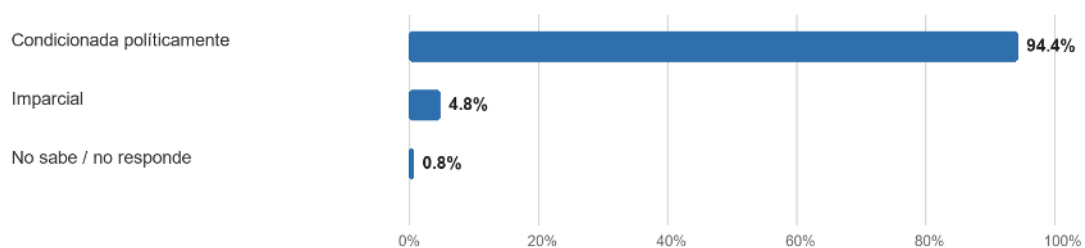
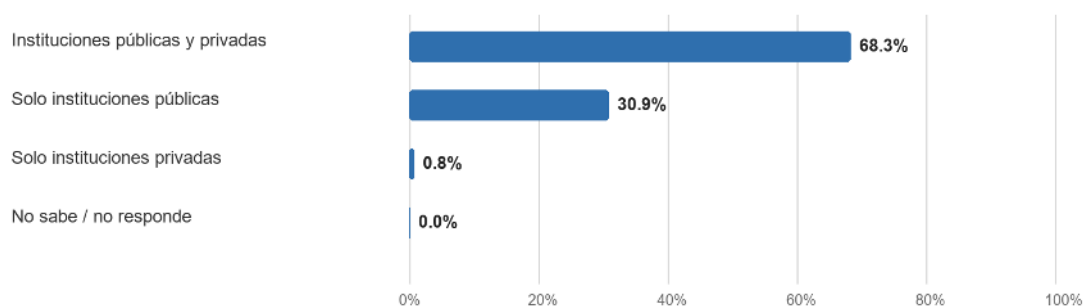


Figura 42. Dónde ocurre el adoctrinamiento político



Medios, oposición y negociación



Las preferencias informativas se concentran en asuntos políticos y económicos. El 62.1% selecciona noticias de política, mientras economía e internacionales alcanzan 40.2% cada una. Les siguen sucesos (18.2%), deportes (13.4%), farándula (9.6%), derechos humanos (3.8%) y migración (2.0%). La pregunta permitía escoger un máximo de dos contenidos, por lo que los porcentajes no suman 100% y expresan la proporción que seleccionó cada opción.

Los medios de comunicación independientes mantienen una valoración favorable: 21.7% los considera muy creíbles y 65.7% creíbles, para un 87.4% conjunto; 12.6% los califica como poco creíbles y ninguna persona selecciona “Nada creíbles”. En marzo el indicador favorable fue 83.7%, por lo que aumenta 3.7 puntos porcentuales. La comparabilidad es media porque junio amplió la escala de respuesta de dos a cuatro niveles.

La valoración del papel de la oposición democrática es más crítica. Del total, 21.0% la califica como buena, 54.0% como regular, 22.5% como mala y 2.5% no sabe o no responde. Al excluir “No sabe / no responde”, la valoración positiva alcanza 21.5%, frente a 18.5% en marzo. El aumento es de 3.0 puntos porcentuales y tiene comparabilidad alta porque la categoría “Buena” es equivalente en ambas rondas.

La negociación política genera una disposición mayoritariamente condicionada. El 35.4% considera que sí podría contribuir a crear condiciones para una transición democrática y 39.9% responde que depende de las condiciones; juntas representan 75.3% del total. En contraste, 22.7% responde que no y 2.0% no sabe o no responde. Al excluir “No sabe / no responde”, las categorías “Sí” y “Depende” suman 76.8%.

La comparación longitudinal de la negociación no debe calcularse ni interpretarse como una variación. En marzo se midió un apoyo de 78.2%, mientras el indicador afirmativo de junio es 36.1% al excluir “No sabe / no responde”, pero el objeto y la redacción de la pregunta cambiaron de fondo. Junio debe leerse como una medición propia sobre la posible contribución de una negociación a una transición democrática.

Las condiciones consideradas principales para aceptar una negociación muestran prioridades diversas. El acompañamiento internacional ocupa el primer lugar con 29.0%, seguido del restablecimiento de libertades públicas (27.0%), la liberación de presos políticos (14.4%) y la unidad de la oposición democrática (13.4%). Las garantías electorales representan 8.1% y la justicia para las víctimas de la represión 7.6%.

En conjunto, los medios independientes conservan una credibilidad alta entre las personas consultadas y la política es el contenido informativo más demandado. Esta valoración contrasta con una evaluación mayoritariamente regular o negativa de la oposición democrática. La negociación aparece como una posibilidad para la transición, pero su respaldo está fuertemente condicionado y se vincula sobre todo con acompañamiento internacional, libertades públicas y garantías políticas concretas.

Resultados gráficos

Las figuras 26 y 43 a 46 presentan las preferencias informativas, la credibilidad de los medios independientes y las valoraciones sobre la oposición y una posible negociación política.

Figura 26. Contenido noticioso preferido

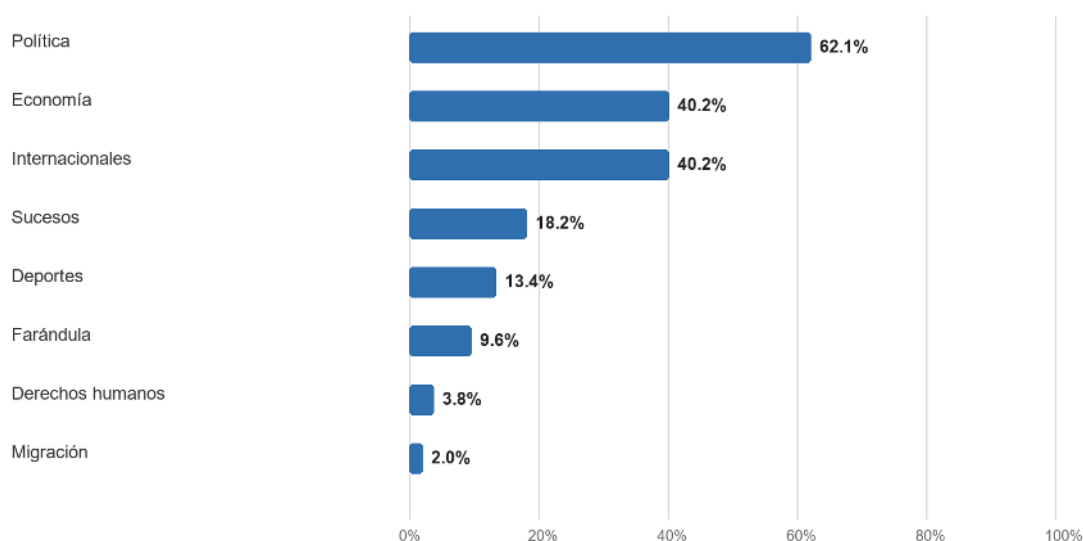


Figura 43. Credibilidad de medios independientes

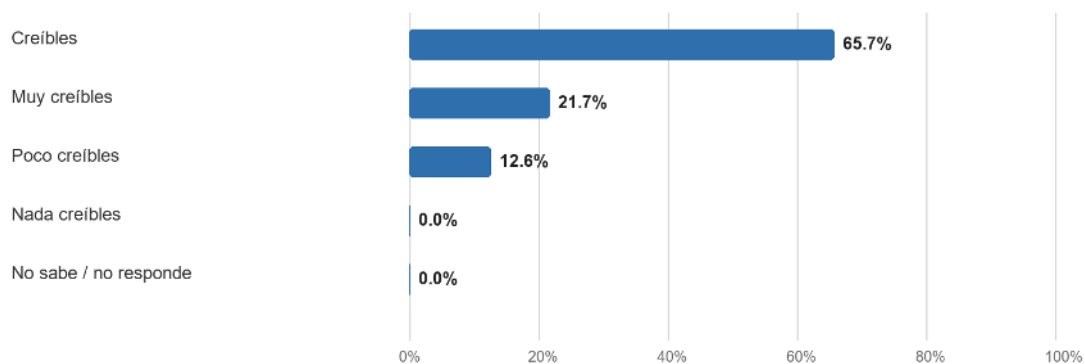


Figura 44. Papel de la oposición democrática

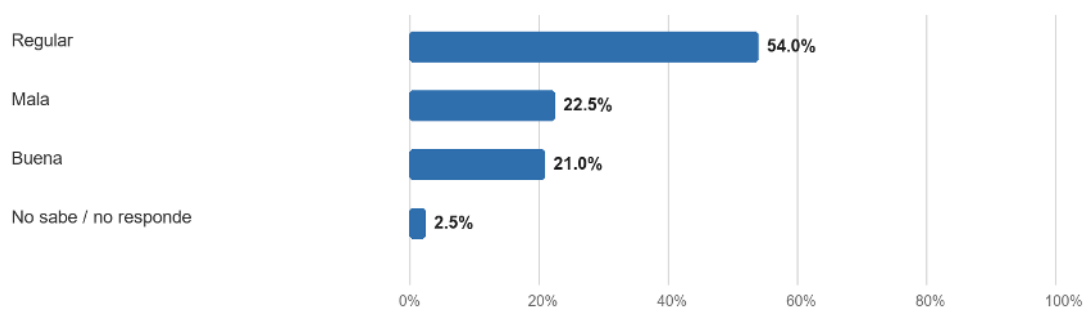


Figura 45. Negociación política y transición democrática

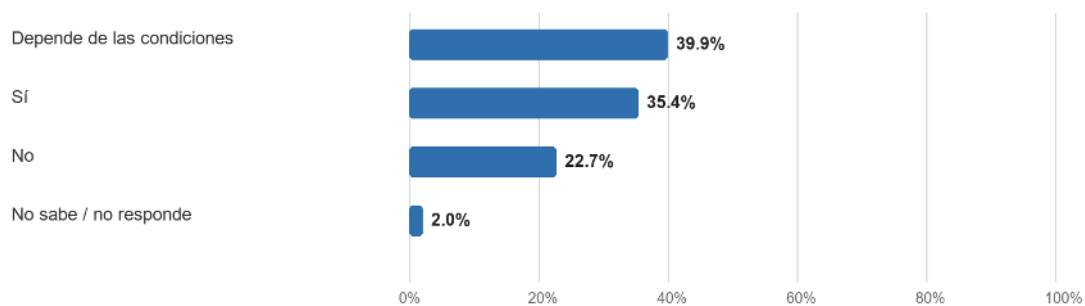
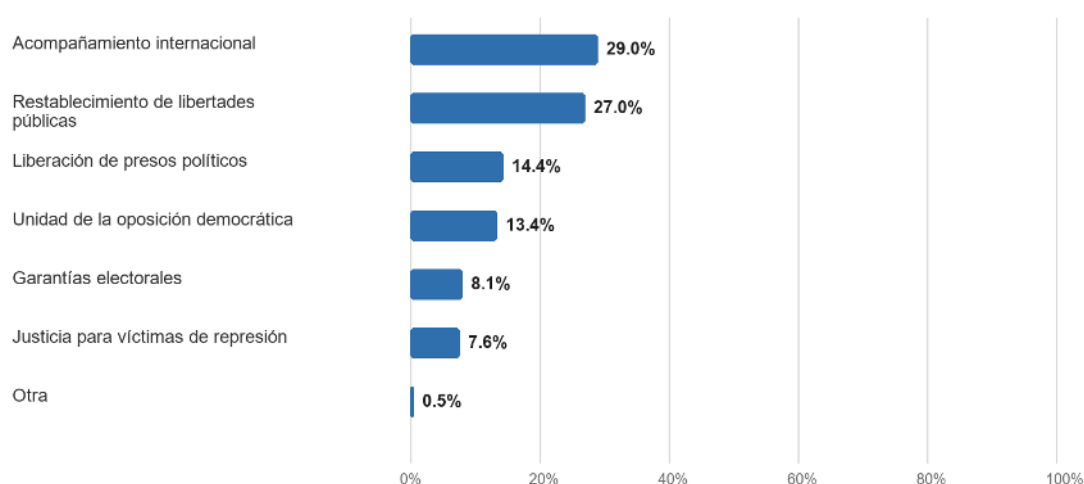


Figura 46. Condición principal para aceptar una negociación



Comparación longitudinal marzo-junio

La comparación entre marzo y junio permite identificar cambios y continuidades, pero su interpretación depende de la equivalencia entre las preguntas. La matriz clasifica los indicadores como de comparabilidad alta, media o no comparable. Las variaciones se expresan en puntos porcentuales y los denominadores cambian cuando se excluyen categorías no sustantivas, como “No sabe / no responde” o “Prefiere no responder”, por lo que cada indicador debe leerse con su base correspondiente.

Entre los indicadores de comparabilidad alta no existe una dirección única. Disminuyen la percepción de que los precios subieron mucho (-12.2 puntos), la intención de emigrar (-8.7), la migración familiar reciente (-3.6), la recepción de remesas (-2.5) y la proporción con familiares en instituciones del Estado (-4.1). Sin embargo, varios de estos resultados permanecen en niveles elevados y una reducción no implica necesariamente que haya desaparecido el problema.

El cambio político más pronunciado entre los indicadores altamente comparables es el descenso de la expectativa de elecciones libres en 2027: pasa de 55.6% a 40.1%, una caída de 15.6 puntos porcentuales. En sentido contrario, la percepción de aumento de la inseguridad sube de 76.4% a 83.0%, un incremento de 6.6 puntos. El conocimiento reportado de corrupción municipal se mantiene relativamente estable, al pasar de 77.9% a 75.9% (-2.1 puntos).

Los indicadores de servicios públicos muestran un deterioro consistente. La valoración negativa de la salud aumenta de 81.2% a 84.5% (+3.3 puntos) y la percepción de atención condicionada políticamente pasa de 87.5% a 95.2% (+7.7). En educación, la valoración negativa crece de 89.2% a 92.9% (+3.7) y el adoctrinamiento observado de 87.0% a 91.1% (+4.1). Todos tienen comparabilidad alta.

La valoración positiva de la oposición democrática aumenta de 18.5% a 21.5% (+3.0 puntos) con comparabilidad alta. Aunque la variación es favorable, el nivel de junio continúa siendo

minoritario. Este resultado debe leerse junto con la caída de la expectativa electoral y no como evidencia suficiente de una recuperación amplia de confianza o representación.

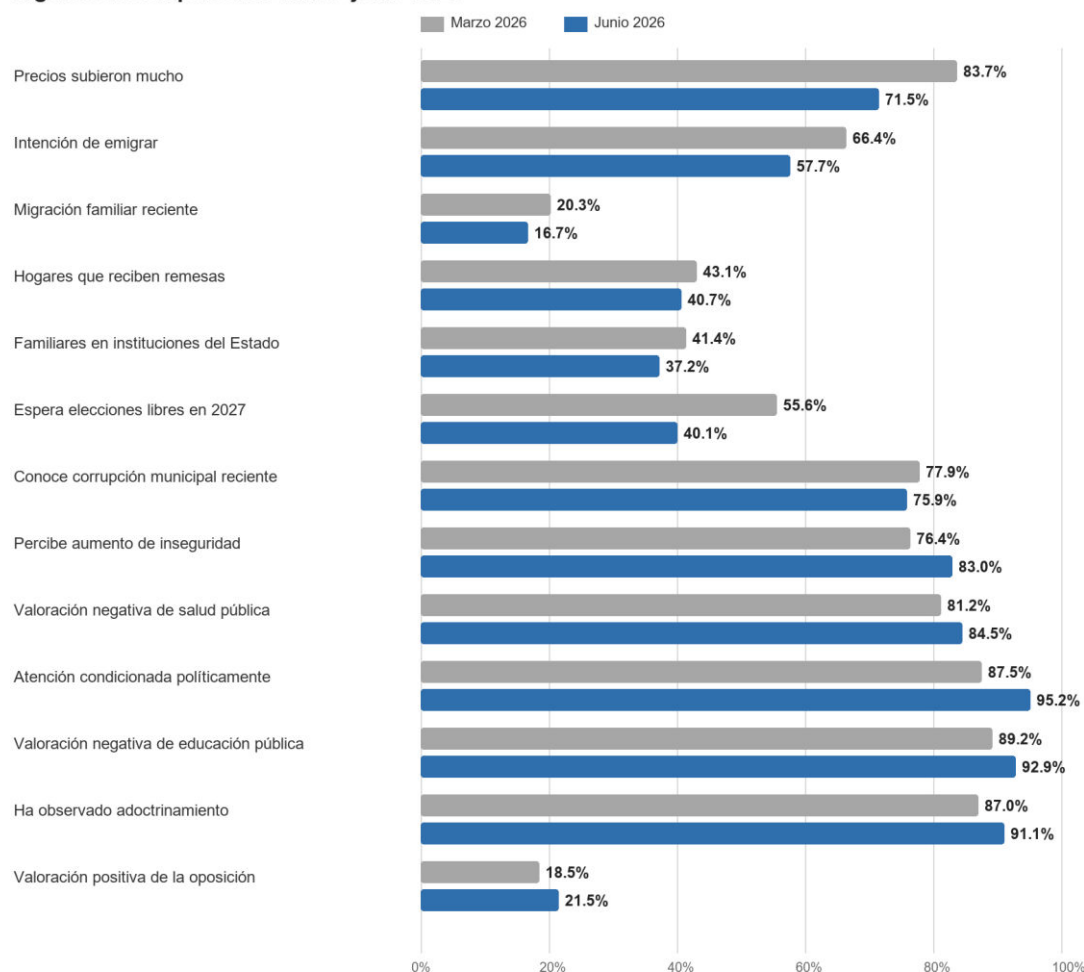
Los indicadores de comparabilidad media requieren mayor cautela. Las reducciones en falta de cobertura de gastos básicos (-15.6 puntos), canasta básica (-23.9) y valoración mala del futuro del país (-12.7) coinciden con cambios de categorías, escalas o referencias. Lo mismo ocurre con vigilancia/control (-2.8), presión externa (-3.7), participación actual (+2.2), interés en participar (-30.4) y credibilidad de medios (+3.7). En particular, la caída del interés en participar no puede separarse de la incorporación de la opción “Tal vez” en junio.

La negociación política es el único indicador clasificado como no comparable: marzo midió apoyo general, mientras junio preguntó si una negociación podría contribuir a crear condiciones para una transición y añadió respuestas condicionadas. Por ello, 78.2% en marzo y 36.1% afirmativo en junio no deben interpretarse como una caída. En conjunto, la comparación muestra menor expectativa electoral y mayor deterioro percibido en seguridad, salud y educación, junto con descensos en algunos indicadores económicos y migratorios que deben analizarse según su nivel de comparabilidad.

Resultados gráficos

La Figura 53 sintetiza los principales cambios entre marzo y junio de 2026 según su nivel de comparabilidad.

Figura 53. Comparación marzo-junio 2026



Conclusiones

Los resultados de junio describen una experiencia ciudadana marcada por presión económica persistente, deterioro de servicios públicos y bajas expectativas de cambio político. Estas dimensiones no aparecen aisladas: se superponen en la vida cotidiana y configuran un entorno de incertidumbre, control y capacidad limitada para incidir en los asuntos públicos.

En economía, 71.5% considera que los precios subieron mucho, 58.6% no logra cubrir sus gastos básicos y 55.8% no cubre la canasta básica. Aunque algunos indicadores mejoran frente a marzo, los niveles de privación siguen siendo altos. La intención de emigrar alcanza 57.7% y 40.7% de los hogares recibe remesas, lo que muestra que la migración y el apoyo desde el exterior mantienen un peso importante en la experiencia de los hogares consultados.

La percepción de vigilancia y control permanece extendida, mientras la liberación de presos políticos y el fin de la persecución reúnen un consenso especialmente alto. Estos resultados colocan los derechos y las garantías políticas entre las preocupaciones centrales de la consulta y muestran que el control político forma parte de las experiencias declaradas por las personas participantes.

La dimensión electoral combina menor expectativa y participación limitada. Solo 40.1% espera elecciones libres en 2027, 27.2% declara participar actualmente y 21.5% valora positivamente a la oposición democrática. En conjunto, estos datos reflejan escepticismo sobre la vía electoral y debilidad de los canales de representación. La comparación del interés en participar requiere cautela porque las opciones de respuesta cambiaron en junio.

La corrupción y la inseguridad forman otro núcleo crítico: 75.9% reporta conocer hechos recientes de corrupción municipal y 83.0% percibe que la inseguridad aumentó. La coincidencia de ambos resultados permite leer conjuntamente la evaluación de la gestión pública local y la percepción de protección ciudadana, pero la consulta no permite establecer una relación causal entre estos fenómenos.

El deterioro de los servicios públicos es uno de los hallazgos más consistentes. La salud pública recibe una valoración negativa de 84.5% y 95.2% percibe condicionamiento político en la atención. En educación, 92.9% la valora negativamente y 91.1% afirma haber observado adoctrinamiento. La convergencia de estos resultados convierte a salud y educación en componentes centrales del malestar ciudadano, no en problemas sectoriales secundarios.

La alta credibilidad atribuida a los medios independientes, 87.4%, contrasta con la baja valoración positiva de la oposición. Esto sugiere que existen canales informativos reconocidos, pero no una representación política con el mismo nivel de valoración. La negociación política debe leerse como una medición propia de junio, pues la pregunta cambió de manera sustantiva y sus resultados no representan una caída comparable frente a marzo.

La comparación longitudinal refuerza este panorama: entre los indicadores altamente comparables, la expectativa de elecciones libres cae 15.6 puntos, mientras aumentan la percepción de inseguridad (+6.6), la atención de salud condicionada políticamente (+7.7) y la valoración negativa de la educación (+3.7). Al mismo tiempo, disminuyen algunos indicadores económicos y migratorios. No existe una tendencia única, pero sí prioridades claras para la lectura final del informe: condiciones de vida, servicios públicos, derechos políticos, seguridad, credibilidad electoral y representación democrática.

En suma, el malestar registrado no se concentra en un solo ámbito, sino que articula condiciones materiales, desempeño institucional y expectativas políticas. El valor del informe está en mostrar esas conexiones sin presentar asociaciones descriptivas como relaciones causales ni tratar como comparables preguntas que cambiaron entre rondas.

Anexo gráfico. Figuras complementarias

Para conservar la transparencia del informe sin sobrecargar el cuerpo principal, este anexo reúne las figuras 21, 27, 47, 48, 49 y 50.

Figura 21. Modalidades de vigilancia digital detectadas

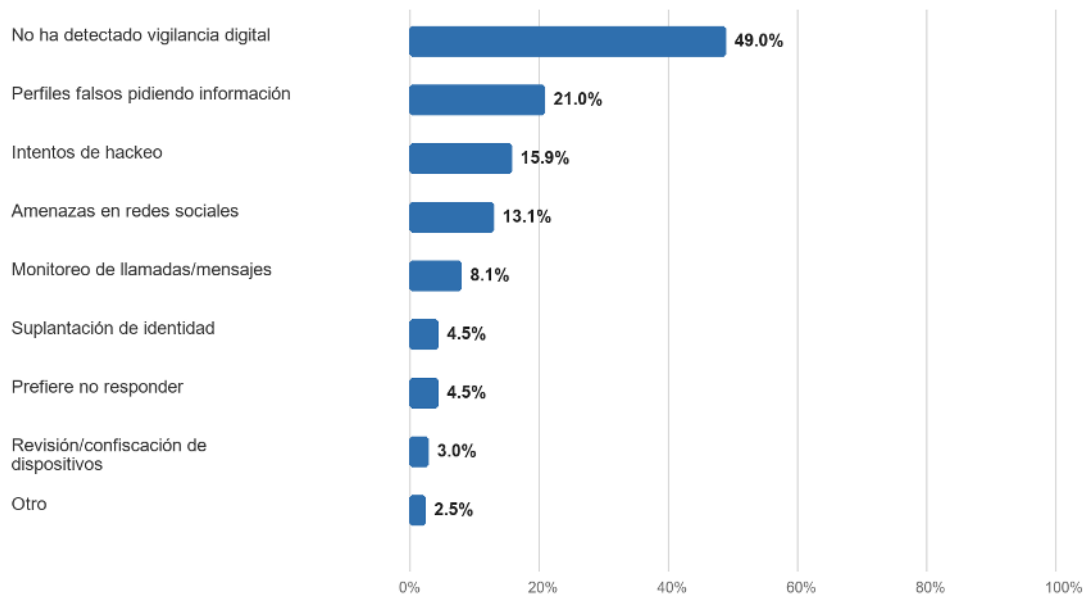


Figura 27. Nivel de escolaridad

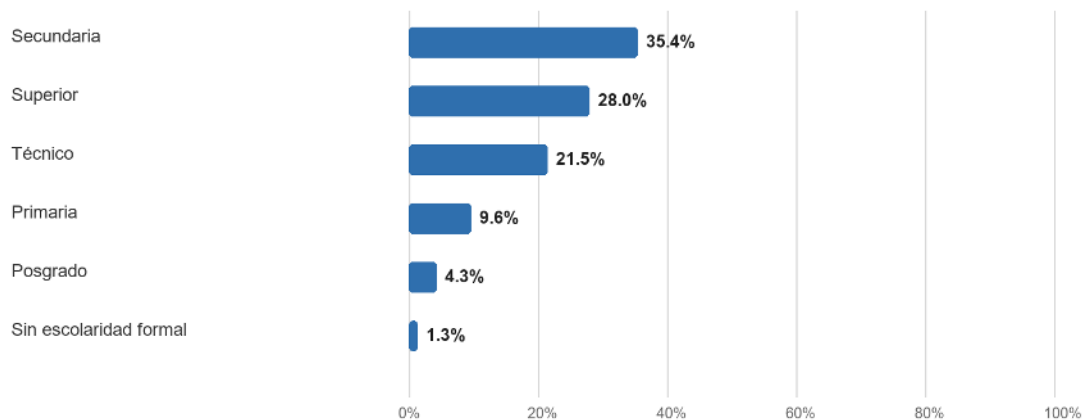


Figura 47. Tamaño del núcleo familiar

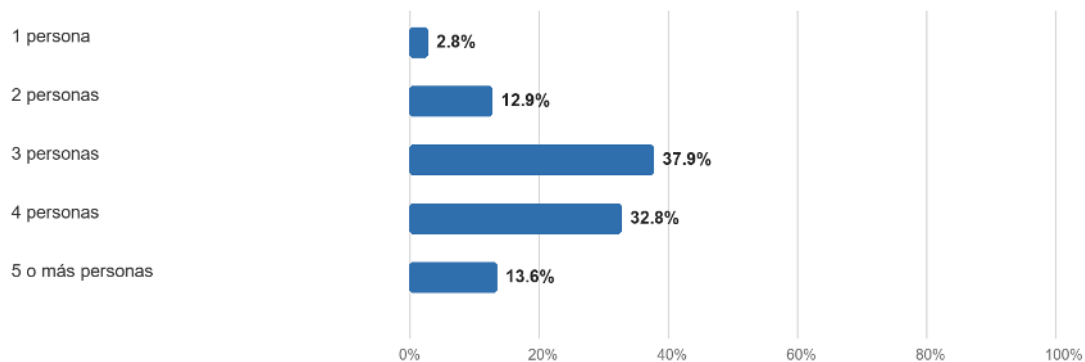


Figura 48. Personas que trabajan en el hogar

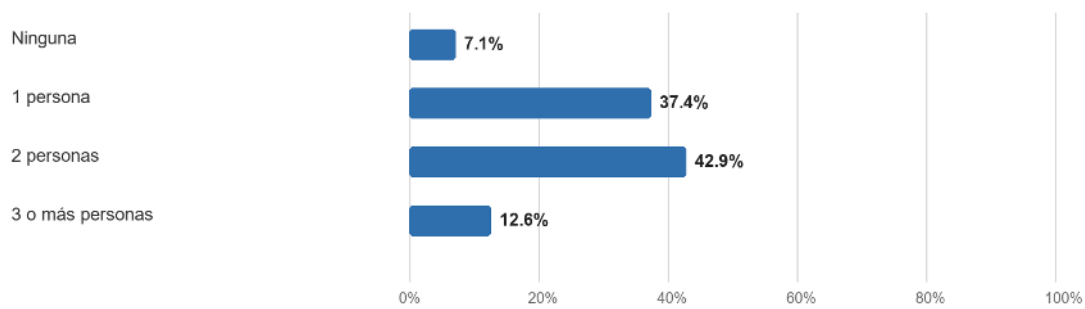


Figura 49. Edad de la persona que migró

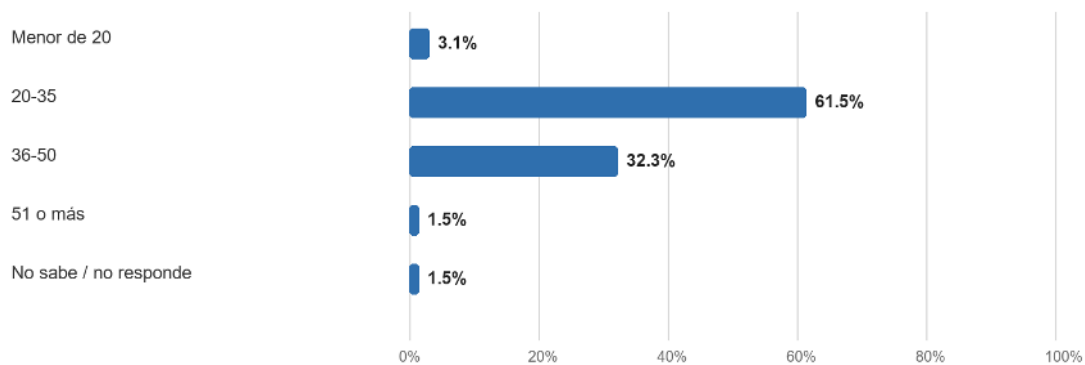
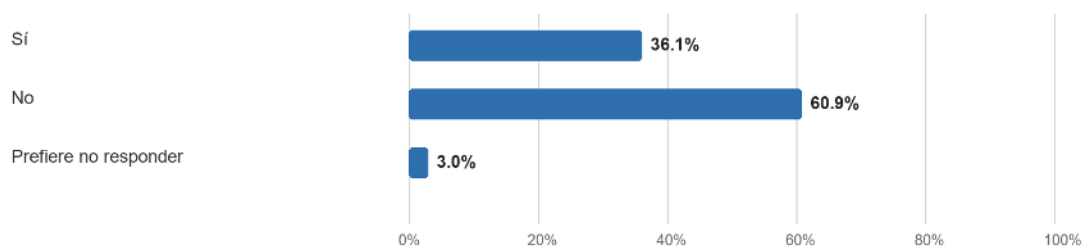


Figura 50. Familiares trabajando en instituciones del Estado



Anexo 1. Tablas descriptivas

Las tablas presentan frecuencias y porcentajes de las 396 respuestas incluidas en el análisis. En las preguntas condicionadas, la base corresponde únicamente a las personas elegibles; en las preguntas de respuesta múltiple, los porcentajes pueden sumar más de 100%.

Preguntas de respuesta única

Pregunta	Tema	Enunciado	Resultados	Base
P2	Perfil de la muestra	¿Cuál es su rango de edad?	18-25: 44 (11.1%); 26-35: 98 (24.7%); 36-50: 155 (39.1%); 51-65: 74 (18.7%); 66 o más: 25 (6.3%)	396
P3	Perfil de la muestra	Sexo/Género.	Hombre: 210 (53.0%); Mujer: 183 (46.2%); Otro/a: 3 (0.8%); Prefiere no responder: 0 (0.0%)	396
P4	Perfil de la muestra	¿Cuál es su nivel de escolaridad?	Primaria: 38 (9.6%); Secundaria: 140 (35.4%); Técnico: 85 (21.5%); Superior: 111 (28.0%); Posgrado: 17 (4.3%); Sin escolaridad formal: 5 (1.3%)	396
P6	Economía y hogar	¿Cuál es su situación laboral actual?	Empleo formal: 107 (27.0%); Empleo informal: 68 (17.2%); Trabajo por cuenta propia: 160 (40.4%); Desempleado/a: 10 (2.5%); Jubilado/a o pensionado/a: 22 (5.6%); Estudiante: 13 (3.3%); Trabajo doméstico o de cuidados no remunerado: 16 (4.0%)	396
P7	Economía y hogar	¿Con sus ingresos logra cubrir sus gastos básicos mensuales?	Sí: 56 (14.1%); No: 232 (58.6%); Parcialmente: 108 (27.3%)	396
P8	Economía y hogar	¿De cuántas personas está conformado su núcleo familiar?	1 persona: 11 (2.8%); 2 personas: 51 (12.9%); 3 personas: 150 (37.9%); 4 personas: 130 (32.8%); 5 o más personas: 54 (13.6%)	396
P9	Economía y hogar	Incluyéndose usted,	Ninguna: 28 (7.1%); 1	396

Pregunta	Tema	Enunciado	Resultados	Base
		¿cuántas personas de su núcleo familiar trabajan actualmente?	persona: 148 (37.4%); 2 personas: 170 (42.9%); 3 o más personas: 50 (12.6%)	
P10	Economía y hogar	En los últimos tres meses, ¿qué tanto considera que han subido los precios de los productos de la canasta básica?	Mucho: 283 (71.5%); Poco: 101 (25.5%); Se han mantenido igual: 12 (3.0%); Han disminuido: 0 (0.0%)	396
P12	Economía y hogar	Tomando como referencia que la canasta básica alcanzó aproximadamente C\$ 21,245.69 en abril de 2026, según datos oficiales reportados por INIDE, ¿sus ingresos le permiten cubrirla?	Sí: 42 (10.6%); No: 220 (55.6%); Parcialmente: 132 (33.3%); No sabe / no responde: 2 (0.5%)	396
P13	Economía y hogar	¿Cuál es el rango aproximado de sus ingresos mensuales?	Menor a C\$ 3,500: 6 (1.5%); C\$ 3,500-5,500: 46 (11.6%); C\$ 5,501-7,500: 78 (19.7%); C\$ 7,501-10,999: 112 (28.3%); C\$ 11,000 o más: 143 (36.1%); Prefiere no responder: 11 (2.8%)	396
P14	Economía y hogar	¿Cuál es su percepción sobre el futuro del país?	Buena: 1 (0.3%); Regular: 64 (16.2%); Mala: 323 (81.6%); No sabe / no responde: 8 (2.0%)	396
P16	Migración y remesas	Si pudiese irse del país, ¿lo haría?	Sí: 214 (54.0%); No: 157 (39.6%); No sabe / no responde: 25 (6.3%)	396
P17	Migración y remesas	Si respondió que sí, ¿a qué país emigraría?	Estados Unidos: 122 (57.3%); Costa Rica: 42 (19.7%); España: 40 (18.8%); México: 0 (0.0%); Panamá: 4 (1.9%); Otro: 5 (2.3%)	213
P19	Migración y remesas	¿Ha migrado alguien de su familia en los últimos tres meses?	Sí: 66 (16.7%); No: 330 (83.3%)	396
P20	Migración y remesas	Si respondió que sí, ¿cuál es el rango de edad de la persona que migró?	Menor de 20: 2 (3.1%); 20-35: 40 (61.5%); 36-50: 21 (32.3%); 51 o más: 1 (1.5%); No sabe / no responde: 1 (1.5%)	65

Pregunta	Tema	Enunciado	Resultados	Base
P21	Migración y remesas	¿Su familia recibe algún tipo de remesas?	Sí: 161 (40.7%); No: 235 (59.3%)	396
P22	Migración y remesas	Si respondió que sí, ¿de qué país proceden principalmente las remesas?	Estados Unidos: 95 (59.4%); Costa Rica: 34 (21.3%); España: 25 (15.6%); Panamá: 4 (2.5%); Otro: 2 (1.3%)	160
P23	Estado, control social y derechos ciudadanos	¿Tiene usted familiares trabajando en instituciones del Estado?	Sí: 143 (36.1%); No: 241 (60.9%); Prefiere no responder: 12 (3.0%)	396
P25	Estado, control social y derechos ciudadanos	¿En su entorno ha detectado algún tipo de vigilancia o control sobre la ciudadanía?	Sí: 321 (81.1%); No: 65 (16.4%); No sabe / no responde: 10 (2.5%)	396
P28	Coyuntura política junio 2026	¿Qué tan importante considera usted que sea priorizar la liberación de presos políticos y el cese de la persecución política en cualquier salida a la crisis nacional?	Muy importante: 330 (83.3%); Algo importante: 59 (14.9%); Poco importante: 1 (0.3%); Nada importante: 1 (0.3%); No sabe / no responde: 5 (1.3%)	396
P29	Coyuntura política junio 2026	Brooklyn Rivera, líder indígena miskitu y preso político, murió el 30 de mayo de 2026 bajo custodia del Estado, tras más de dos años de desaparición forzada, aislamiento e incomunicación denunciados por organismos de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece este caso?	Demuestra la responsabilidad directa del régimen en la muerte de presos políticos: 203 (51.3%); Demuestra la gravedad de la persecución política y de la desaparición forzada en Nicaragua: 150 (37.9%); Demuestra una agresión particular contra pueblos indígenas y liderazgos de la Costa Caribe: 8 (2.0%); Es un caso aislado: 5 (1.3%); No conoce el caso: 18 (4.5%); Prefiere no responder: 12 (3.0%)	396
P30	Coyuntura política junio 2026	¿Ha escuchado información reciente sobre conflictos, represión o afectaciones a comunidades indígenas y de la Costa Caribe?	Sí: 156 (39.4%); No: 141 (35.6%); No sabe / no responde: 99 (25.0%)	396
P31	Coyuntura política	¿Considera usted que	Sí: 261 (65.9%); No:	396

Pregunta	Tema	Enunciado	Resultados	Base
	junio 2026	la presión internacional puede contribuir a una transición democrática en Nicaragua?	15 (3.8%); Depende de las condiciones: 108 (27.3%); No sabe / no responde: 12 (3.0%)	
P32	Coyuntura política junio 2026	¿Qué tipo de acción internacional considera más útil para apoyar una salida democrática en Nicaragua?	Sanciones a funcionarios responsables de abusos: 41 (10.4%); Presión diplomática: 56 (14.1%); Acompañamiento a una negociación política: 95 (24.0%); Apoyo a sociedad civil y medios independientes: 11 (2.8%); Una intervención más directa de Estados Unidos y/o de actores internacionales: 178 (44.9%); Ninguna: 14 (3.5%); Otro: 1 (0.3%)	396
P33	Coyuntura política junio 2026	A partir de declaraciones recientes de Marco Rubio, senadores y congresistas de Estados Unidos sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿cree usted que Nicaragua será parte de una nueva ruta de mayor presión de la política exterior estadounidense?	Sí, y esa presión podría contribuir a una transición democrática: 209 (52.8%); Sí, pero esa presión podría endurecer al régimen y aumentar la represión: 108 (27.3%); No, Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen dinámicas distintas: 7 (1.8%); Depende de cómo evolucione la política regional de Estados Unidos: 46 (11.6%); No sabe / no responde: 26 (6.6%)	396
P34	Coyuntura política junio 2026	Si Estados Unidos aumenta la presión sobre Nicaragua, ¿cuál cree usted que sería el efecto más probable?	Aceleraría una negociación o transición democrática: 196 (49.5%); Endurecería al régimen y aumentaría la represión: 154 (38.9%); No tendría mayor efecto: 6 (1.5%); Afectaría principalmente a la población: 25 (6.3%); No sabe / no responde: 15 (3.8%)	396

Pregunta	Tema	Enunciado	Resultados	Base
P35	Coyuntura política junio 2026	¿Cree usted que el conflicto entre Estados Unidos/Israel e Irán afecta las posibilidades de una solución a la crisis nicaragüense?	Sí, la entorpece porque distrae la atención internacional: 252 (63.6%); Sí, podría ayudar porque aumenta la presión sobre aliados de Irán: 72 (18.2%); No, lo ve como un conflicto desvinculado de Nicaragua: 27 (6.8%); No sabe / no responde: 45 (11.4%)	396
P36	Elecciones 2027 y participación política	¿Cree usted que habrá oportunidad para elecciones libres en 2027 en Nicaragua?	Sí: 131 (33.1%); No: 196 (49.5%); No sabe / no responde: 69 (17.4%)	396
P38	Elecciones 2027 y participación política	¿Participa usted en algún movimiento político, social o partido político?	Sí: 101 (25.5%); No: 270 (68.2%); Prefiere no responder: 25 (6.3%)	396
P39	Elecciones 2027 y participación política	Si respondió que no, ¿tiene interés en participar en algún movimiento político, social o ciudadano?	Sí: 39 (14.5%); No: 101 (37.5%); Tal vez: 113 (42.0%); Prefiere no responder: 16 (5.9%)	269
P40	Corrupción, seguridad y servicios públicos	¿Ha conocido actos de corrupción en su municipio ejecutados por funcionarios públicos en los últimos tres meses?	Sí: 277 (69.9%); No: 88 (22.2%); No sabe / no responde: 31 (7.8%)	396
P42	Corrupción, seguridad y servicios públicos	¿Cuál es su percepción sobre la inseguridad ciudadana en los últimos tres meses?	Ha aumentado: 328 (82.8%); Se mantiene igual: 66 (16.7%); Ha disminuido: 1 (0.3%); No sabe / no responde: 1 (0.3%)	396
P44	Corrupción, seguridad y servicios públicos	¿Cuál es su percepción sobre la calidad del sistema de salud pública en Nicaragua?	Muy buena: 4 (1.0%); Buena: 57 (14.4%); Mala: 227 (57.3%); Muy mala: 106 (26.8%); No sabe / no responde: 2 (0.5%)	396
P45	Corrupción, seguridad y servicios públicos	¿Cree usted que la calidad de la atención en salud pública está condicionada políticamente o es imparcial?	Condicionada políticamente: 374 (94.4%); Imparcial: 19 (4.8%); No sabe / no responde: 3 (0.8%)	396
P46	Corrupción, seguridad y servicios públicos	¿Cuál es su percepción sobre la calidad del sistema	Muy buena: 4 (1.0%); Buena: 24 (6.1%); Mala: 231 (58.3%);	396

Pregunta	Tema	Enunciado	Resultados	Base
		de educación pública en Nicaragua?	Muy mala: 136 (34.3%); No sabe / no responde: 1 (0.3%)	
P48	Corrupción, seguridad y servicios públicos	¿Ha sido testigo de prácticas de adoctrinamiento político hacia niños, niñas o jóvenes en instituciones educativas?	Sí: 358 (90.4%); No: 35 (8.8%); No sabe / no responde: 3 (0.8%)	396
P49	Corrupción, seguridad y servicios públicos	Si respondió que sí, ¿dónde considera que se da principalmente ese adoctrinamiento político?	Solo en instituciones públicas: 110 (30.9%); Solo en instituciones privadas: 3 (0.8%); En instituciones públicas y privadas: 243 (68.3%); No sabe / no responde: 0 (0.0%)	356
P51	Medios independientes y oposición democrática	¿Cómo valora a los medios de comunicación independientes?	Muy creíbles: 86 (21.7%); Creíbles: 260 (65.7%); Poco creíbles: 50 (12.6%); Nada creíbles: 0 (0.0%); No sabe / no responde: 0 (0.0%)	396
P52	Medios independientes y oposición democrática	¿Cuál es su percepción sobre el papel de la oposición democrática en los últimos tres meses?	Buena: 83 (21.0%); Regular: 214 (54.0%); Mala: 89 (22.5%); No sabe / no responde: 10 (2.5%)	396
P53	Medios independientes y oposición democrática	¿Considera usted que una negociación política podría contribuir a crear condiciones para una transición democrática en Nicaragua?	Sí: 140 (35.4%); No: 90 (22.7%); Depende de las condiciones: 158 (39.9%); No sabe / no responde: 8 (2.0%)	396
P54	Medios independientes y oposición democrática	¿Cuál debería ser la principal condición para que una negociación política sea aceptable?	Liberación de presos políticos: 57 (14.4%); Restablecimiento de libertades públicas: 107 (27.0%); Garantías electorales: 32 (8.1%); Justicia para víctimas de represión: 30 (7.6%); Acompañamiento internacional: 115 (29.0%); Unidad de la oposición democrática: 53 (13.4%); Otra: 2 (0.5%)	396

Preguntas de respuesta múltiple

Pregunta	Tema	Indicador	Resultados	Base elegible
P11	Economía	Productos que se han encarecido	Queso: 254 (66.1%); Frijoles: 206 (53.6%); Carne: 300 (78.1%); Tortilla: 125 (32.6%); Arroz: 167 (43.5%); Aceite: 217 (56.5%); Huevos: 256 (66.7%); Jabón/detergente: 136 (35.4%); Medicamentos: 233 (60.7%); Transporte: 100 (26.0%); Otro: 9 (2.3%)	384
P15	Economía	Causas de valoración del futuro	Situación económica: 235 (60.7%); Crisis sociopolítica: 240 (62.0%); Corrupción: 83 (21.4%); Falta de empleo: 52 (13.4%); Inseguridad ciudadana: 78 (20.2%); Falta de libertades: 74 (19.1%); Migración familiar: 13 (3.4%); Otro: 1 (0.3%)	387
P18	Migración	Razones para emigrar	Situación económica: 161 (75.2%); Falta de empleo: 47 (22.0%); Acoso o intimidación: 18 (8.4%); Falta de libertades: 47 (22.0%); Reunificación familiar: 6 (2.8%); Desesperanza por la crisis política: 90 (42.1%); Estudios: 7 (3.3%); Otro: 0 (0.0%)	214
P24	Derechos	Tipos de represión laboral	No ha escuchado de casos de represión laboral: 14 (9.8%); Revisión de celulares: 28 (19.6%); Asistencia obligatoria a actividades partidarias: 118 (82.5%); Vigilancia de redes sociales: 57 (39.9%); Intimidación o amenazas: 44 (30.8%); Asistencia obligatoria a entrenamientos o actividades político-militares: 38 (26.6%);	143

Pregunta	Tema	Indicador	Resultados	Base elegible
			Despidos o amenazas de despido: 63 (44.1%); Prefiere no responder: 2 (1.4%); Otro: 1 (0.7%)	
P26	Derechos	Actores que ejercen vigilancia	Policía: 127 (39.6%); Paramilitares: 117 (36.4%); CPC / estructuras partidarias: 200 (62.3%); Funcionarios públicos: 54 (16.8%); Vecinos o informantes: 115 (35.8%); Otro: 4 (1.2%)	321
P27	Derechos	Modalidades de vigilancia digital	No ha detectado vigilancia digital: 194 (49.0%); Amenazas u hostigamiento en redes sociales: 52 (13.1%); Intentos de hackeo: 63 (15.9%); Perfiles falsos solicitando información privada: 83 (21.0%); Suplantación de identidad: 18 (4.5%); Revisión o confiscación de dispositivos: 12 (3.0%); Intervención o monitoreo de llamadas/mensajes: 32 (8.1%); Prefiere no responder: 18 (4.5%); Otro: 10 (2.5%)	396
P37	Elecciones	Condiciones para elecciones libres	Observación electoral independiente: 200 (50.5%); Liberación de presos políticos: 220 (55.6%); Restablecimiento de libertades públicas: 252 (63.6%); Participación libre de partidos y movimientos opositores: 188 (47.5%); Registro electoral transparente: 123 (31.1%); Reforma del Consejo Supremo Electoral: 197 (49.7%); Otro: 13 (3.3%)	396

Pregunta	Tema	Indicador	Resultados	Base elegible
P41	Corrupción	Tipos de actos de corrupción	Malversación de fondos públicos: 88 (31.8%); Licitaciones amañadas: 105 (37.9%); Uso indebido de bienes públicos: 187 (67.5%); Nepotismo: 171 (61.7%); Sobresueldos: 42 (15.2%); Cobros ilegales: 37 (13.4%); Otro: 6 (2.2%)	277
P43	Seguridad	Actos de criminalidad comunes	Hurto: 143 (36.1%); Robo: 327 (82.6%); Acoso callejero: 81 (20.5%); Asesinatos: 146 (36.9%); Femicidios: 134 (33.8%); Violaciones: 54 (13.6%); Extorsión: 23 (5.8%); Venta o consumo de drogas: 132 (33.3%); Otro: 2 (0.5%)	396
P47	Educación	Causas de mala educación pública	Poca preparación de los docentes: 153 (41.7%); Deficiencias del programa académico: 107 (29.2%); Partidización del sistema educativo: 311 (84.7%); Falta de recursos: 36 (9.8%); Deterioro de infraestructura: 12 (3.3%); Otro: 4 (1.1%)	367
P50	Medios	Contenido noticioso preferido	Política: 246 (62.1%); Sucesos: 72 (18.2%); Economía: 159 (40.2%); Internacionales: 159 (40.2%); Deportes: 53 (13.4%); Farándula: 38 (9.6%); Derechos humanos: 15 (3.8%); Migración: 8 (2.0%)	396

Anexo 2. Cruces analíticos

Los cruces siguientes resumen los seis hallazgos seleccionados para complementar el análisis temático. Los porcentajes excluyen respuestas no informativas cuando corresponde y describen únicamente a las personas participantes. No deben interpretarse como relaciones causales ni como estimaciones de la población. Los cruces territoriales no se publican como hallazgos comparativos debido a sus bases pequeñas e inestables.

Segmentación	Hallazgo	Comparación principal	Magnitud	Solidez	Cautela
Edad	La intención de emigrar disminuye claramente con la edad.	18-25: 86.4%; 66 o más: 10.0%	76.4 puntos	Alta	Se utilizan respuestas sustantivas; el resultado no debe interpretarse como una relación causal.
Situación laboral	La intención de emigrar es mayor entre quienes tienen empleo informal.	Informal: 78.1%; formal: 61.5%; cuenta propia: 50.0%	28.1 puntos frente a cuenta propia	Alta	No se incluyen categorías laborales con menos de cinco casos.
Sexo/Género	La recepción de remesas es más frecuente entre las mujeres consultadas.	Mujer: 49.2%; hombre: 33.8%	15.4 puntos	Alta	Las demás categorías se suprimen por N menor a 5.
Sexo/Género	La percepción de aumento de la inseguridad es mayor entre las mujeres.	Mujer: 88.5%; hombre: 78.6%	9.9 puntos	Media-alta	Describir como diferencia en la consulta, no como estimación poblacional.
Ingresos	La falta de cobertura de gastos se concentra por debajo de C\$ 11,000 mensuales.	C\$ 3,500-10,999: 71.8%-76.8%; C\$ 11,000 o más: 28.7%	Al menos 43.1 puntos	Alta	El tramo menor de C\$ 3,500 no se interpreta debido a su base de seis casos.
Edad	El grupo de 18 a 25 años expresa mayor expectativa de elecciones libres.	18-25: 65.6%; demás grupos: 20.8%-41.9%	23.7 puntos sobre el siguiente grupo	Media-alta	La relación no es lineal y debe describirse sin generalizar.

Anexo 3. Control de calidad y reclasificación territorial

Este anexo resume los controles aplicados durante el cierre de la base. Las respuestas originales se conservaron sin modificaciones; las correcciones se realizaron únicamente en la capa procesada y quedaron documentadas en la bitácora de cierre.

Resumen de controles aplicados

Control aplicado	Casos o alcance	Criterio	Resultado
Respuestas contradictorias en vigilancia digital (P27)	5 casos	Se conservó la opción que describe una modalidad de vigilancia y no se contó la opción negativa exclusiva.	Casos incluidos; corrección aplicada únicamente en la base procesada.
Respuestas contradictorias en represión laboral (P24)	1 caso	Se conservó la opción que describe una modalidad de represión y no se contó la opción negativa exclusiva.	Caso incluido; corrección aplicada únicamente en la base procesada.
Caso de prueba	1 caso	Se mantuvo la exclusión definida en el control del levantamiento.	No se incorporó al análisis.
Normalización territorial	Todas las respuestas territoriales; 2 valores no territoriales	Se normalizaron variantes ortográficas y nombres de distritos; los valores “Masculino” y “Mujer” se clasificaron como sin dato territorial, sin imputar un municipio.	Cruces territoriales contruidos con nombres canónicos; respuestas originales conservadas.

Criterios de reclasificación territorial

Criterio	Aplicación	Alcance
Nombre canónico	Se conservaron los nombres municipales y distritales ya escritos correctamente.	34 registros del diccionario
Variantes de escritura	Se corrigieron mayúsculas, tildes, puntos finales, errores ortográficos evidentes y variantes del nombre municipal.	61 variantes del diccionario
Distritos de Managua	Se unificaron expresiones como “Distrito 1”, “Managua Distrito I” y equivalentes bajo el formato “Managua - Distrito I”.	42 entradas del diccionario corresponden a distritos de Managua
Valores no territoriales	No se asignó un municipio cuando el campo contenía una respuesta que no identificaba un territorio.	2 valores clasificados como sin dato territorial
Conservación de la fuente	La normalización se aplicó en la capa procesada; el valor recibido	Todas las correcciones territoriales

Criterio	Aplicación	Alcance
	originalmente se mantuvo sin cambios.	